

Hacemos memoria

Contexto histórico y social del
departamento de Antioquia,
subregiones: Urabá y Oriente, Medellín.

EQUIPO DE TRABAJO

Patricia Nieto, docente de Periodismo, Universidad de Antioquia
Matthias Kopp, coordinador de proyectos en Colombia, DW Akademie
Margarita Isaza Velásquez, periodista, Universidad de Antioquia
Lina María Martínez Mejía, periodista, Universidad de Antioquia
Víctor Andrés Casas Mendoza, periodista, Universidad de Antioquia
Juan Camilo Castañeda Arboleda, periodista, Universidad de Antioquia
Juan Camilo Arboleda Alzate, docente de Periodismo, Universidad de Antioquia
Elizabeth Otálvaro Vélez, estudiante de Periodismo, Universidad de Antioquia
Carlos Andrés Hernández Duque, estudiante de Periodismo, Universidad de Antioquia

FACULTAD DE COMUNICACIONES - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

DEUTSCHE WELLE AKADEMIE

MEDELLÍN, COLOMBIA

NOVIEMBRE DE 2015

TABLA DE CONTENIDO

1. Contexto general, historia y configuración del departamento de Antioquia...	3
1.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos.....	3
1.2 Vocación productiva y uso del suelo.....	4
1.3 Formas de participación y organización política.....	11
1.4 Breve historia del conflicto armado.....	15
1.5 Referentes bibliográficos.....	18
2. Contexto, subregión Urabá.....	22
2.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos.....	22
2.2 Vocación productiva y uso del suelo.....	23
2.3 Formas de participación y organización política.....	24
2.4 Breve historia del conflicto armado.....	28
2.5 Situación de los medios de comunicación.....	34
2.6 Bibliografía.....	36
3. Contexto, subregión Oriente antioqueño.....	37
3.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos.....	37
3.2 Vocación productiva y uso del suelo.....	40
3.3 Formas de participación y organización política.....	42
3.4 Breve historia del conflicto armado.....	46
3.5 Situación de los medios de comunicación en la región.....	50
3.6 Bibliografía.....	52
4. Contexto, Medellín.....	53
4.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos.....	53
4.2 Conflicto armado, formas de participación y organización política.....	55
4.3 Situación de los medios de comunicación en la ciudad.....	59
4.4 Bibliografía.....	60

CONTEXTO GENERAL HISTORIA Y CONFIGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos

Cuando los españoles llegaron al territorio antioqueño se encontraron con dos grupos indígenas ubicados en los ríos Cauca y Nechí: Nutabes y Tahamíes. Sin embargo, ellos no eran los únicos: al nororiente se localizaban los Yamecíes y los Guamocoes, y cerca del río Magdalena los Pantagoros, los Coronados y los Amamíes. Todos tenían como base económica la extracción del oro y la agricultura, además de los productos que podían obtener gracias al intercambio comercial.

Antioquia fue una región de historia de mineros y comerciantes, de un espíritu empresarial que prevalece desde su conformación en 1541 por Jorge Robledo, aunque entonces era un poblado cerca de la actual cabecera de Peque; cinco años más tarde, el mismo Robledo fundó otro poblado en el valle del Tonusco: Santa Fe, ciudad que se convertiría en el centro administrativo y económico de la provincia. Unos años más tarde, Gaspar de Rodas reunió a los habitantes de las dos poblaciones bajo el nombre Santa Fe de Antioquia. Para ser precisos, la historia del departamento de Antioquia, ya como entidad territorial, comienza en 1569 cuando se ordena su separación de la Gobernación de Popayán. En 1584, específicamente el 30 de octubre, Santa Fe de Antioquia se convierte en capital de la provincia de Antioquia. En 1830, con la desintegración de la república de la Gran Colombia, vuelve a emerger como provincia hasta 1856, cuando se conformó en Estado Soberano. En 1886 se convirtió en el actual departamento con la desaparición de los Estados Unidos de Colombia.

Este departamento está ubicado al noroeste de Colombia, ocupa un territorio de 63.612 km², limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba, al occidente con el departamento del Chocó, al oriente con Bolívar, Santander y Boyacá y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Este es considerado el sexto departamento más extenso de Colombia con una organización territorial que consta de nueve subregiones y su capital Medellín.

El oro se convierte en el elemento que proyecta a Antioquia en la historia colombiana desde la primera mitad del siglo XVI, pero ello no significa que se estuviera hablando de un terreno homogéneo y sin dificultades: el territorio contaba entonces con una gran riqueza aurífera, aunque al mismo tiempo no podía escapar a los problemas del abastecimiento de alimentos y de manufacturas; todo ello se debe, en principio, a las condiciones propias del territorio (de topografía montañosa) y a la dispersión geográfica de su población. De igual modo, este siglo fue importante para Antioquia por dos momentos: la disputa del territorio por parte de Cartagena y Popayán y el exterminio de los pueblos indígenas. Este último hecho generó la ausencia de mano de obra indígena y el ingreso de los negros esclavos,

aunque por su elevado costo los blancos españoles se vieron en la necesidad de trabajar manualmente.

En términos generales, se identifica que el proceso de reconocimiento y sometimiento de los pueblos indígenas culminó en los primeros años del siglo XVII, momento en el que se consolidaron también Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Zaragoza como centros de la minería. La vocación minera de esas zonas hacía que la tierra no fuera apta para cultivos, lo que obligaba a que los productos alimenticios que demandaba el trabajo fueran transportados desde otras ciudades. De esa forma se establecieron (casi de manera espontánea) centros agrícolas y ganaderos de cierta relevancia: el Valle de Aburrá fue uno de ellos, pues allí se logró el cultivo de caña de azúcar, maíz y plátano, además de la formación de hatos ganaderos. En este valle existía Aná, convertido en Villa de la Candelaria de Medellín en 1675.

Plaga del cacao, decadencia de la minería y dificultades para el desplazamiento hacen perder a Santa Fe el interés inicial, mientras que Medellín comenzaba a ofrecer un mejor comercio, además de un mejor clima (la temperatura de esta villa propició en parte que se consolidará su relevancia política). Lo anterior generó que crecieran las confusiones sobre la existencia de un centro administrativo, pues los gobernadores empezaron a pasar más tiempo en Medellín y Rionegro que en Santa Fe. Sin embargo, todo se precisó el 17 de abril de 1826, cuando el Congreso decretó el traslado de la capital a Medellín: las razones expresadas fueron: por ser el centro cultural, comercial, científico y artístico del pueblo antioqueño.

Considerando las cifras de los primeros años, el crecimiento poblacional de Antioquia fue lento. Y en ese mismo orden, vale anotar, fueron tempranos, pues iniciaron con la fallida fundación de Santa María la Antigua del Darién en 1510. El poblamiento, que se caracteriza por ser en tierra de clima caliente, comenzó a darse alrededor de las zonas mineras en 1535 en San Sebastián (hoy Necoclí), luego en 1541 en ciudad de Antioquia, en Remedios (1560), Cáceres (1576) y Zaragoza (1581).

Para los años 1600 se hablaba de unos 8.000 habitantes (sin contar indígenas no civilizados). Hasta 1625 se calcula que había entre 3.000 y 4.000 esclavos negros debido a la consolidación de los distritos mineros. Pero luego llegó una crisis minera que dio inicio a la emigración en busca de tierras medias y altas. Entre los siglos XVIII y XIX se tenía de una tasa de crecimiento poblacional cercana al 1.1% anual, pues existía una alta mortalidad y una importante emigración de los habitantes, especialmente hacia el sur.

En el primer tercio del siglo XX la tasa de crecimiento no presentó mayores variaciones: 1,9% anual entre el censo de 1905 y 1934. Ya en el segundo tercio del siglo XX (1934 hasta el censo de 1973) la tasa ascendió al 2,5% anual gracias a una alta natalidad, pero

también a la reducción de la mortalidad y de la emigración en los años cuarenta hacia el departamento de Caldas en busca de una economía cafetera.

Pasando a la mitad del siglo XX, entre 1951 y 1973, se habla de una “explosión demográfica”, aunque ella no se presentó exclusivamente en el departamento sino en todo el país. En ese periodo se registra un crecimiento de 2,93% anual. Como puede verse en la siguiente gráfica (cuadro No.1), este incremento se hace aún más notorio en los más recientes censos. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento de la población antioqueña entre 1973 y 2005 fue el siguiente:

Departamento	Censos					SUPERFICIE KMS ²
	Octubre 24 de 1973	Octubre 15 de 1985	Octubre 15 de 1993	Junio 30 de 2005 (1)		
				Población	%	
Antioquia	3.176.695	4.067.664	4.919.619	5.682.276	13,2	63.612

Cuadro No. 1

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2007

Al gráfico anterior se hace necesario añadir que según el más reciente censo (2012) se habla de 6.221.817 habitantes en Antioquia (conformado por 125 municipios), una población que tiene en el Valle de Aburrá su mayor zona de concentración, dado que allí reside cerca del 60% de su gente. El departamento genera económicamente el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y cuenta con una densidad poblacional de 97,81 hab/km².

Hay un crecimiento, pero también se generan brechas y con ello se abre un margen para la generación de desigualdades, las cuales se expresan de la siguiente manera:

- Entre personas: entre los más ricos y los más pobres.
- Entre indígenas y afros y el resto del grupo humano.
- Entre regiones: diferencia de desarrollo entre las más avanzadas y las más atrasadas.

Con base en un estudio realizado por el Grupo de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, es posible resumir el conjunto de desigualdades y su estado en cada subregión de Antioquia. En este puede apreciarse la brecha entre las subregiones al compararlas con el Valle de Aburrá, donde las capacidades y dotaciones se entienden como el conjunto de factores que incluyen: calidad de vida, capital humano, geografía, recursos naturales, gestión pública, infraestructura y fortaleza económica.

Dicho gráfico permite observar que las regiones con mayores capacidades y dotaciones son: Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Norte. En este sentido se puede decir que un habitante promedio del Oriente cuenta con capacidades y dotaciones que equivalen al 70% de las que

posee un habitante promedio del Valle de Aburrá. En el caso opuesto se tiene que un habitante promedio del Nordeste cuenta apenas con el 28% de las capacidades de un habitante promedio del Valle de Aburrá. Acá es importante no perder de vista que las subregiones Occidente, Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca están por debajo del 30%.

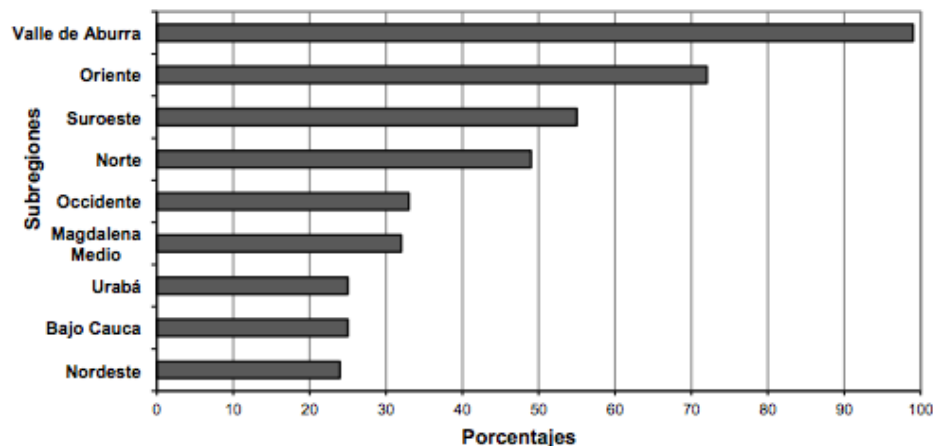


Gráfico No. 1

Índice de capacidades y dotaciones por subregiones

Fuente: Grupo de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia

Como se expresara más arriba, el departamento de Antioquia representa el 13% del PIB nacional. Para 2009, las proyecciones situaban el Producto Interno Bruto del departamento en 69 billones de pesos, lo que equivalió a un crecimiento similar al mostrado por el país ese año; un comportamiento semejante se pudo apreciar con respecto a los índices de desempleo, donde el departamento estuvo ligeramente por encima de la nación.

Como se ha venido observando, las diferencias y las desigualdades en Antioquia son notorias entre las subregiones y sus áreas rural y urbana, donde es clara la mayor vulnerabilidad que puede verse en los habitantes de zonas rurales. En ese orden de ideas, se identifican zonas como Urabá y el Bajo Cauca como las más afectadas por la pobreza en el departamento.

Al año 2005, esta era la conformación de los hogares en Antioquia entre las áreas rurales y urbanas, donde es patente la alta proporción de viviendas que se encuentran en cabeceras.

Subregión	Total hogares	Hogares urbanos	Hogares rurales
Valle de Aburrá	893.407	846.993	46.414
Bajo Cauca	54.317	31.582	22.735
Magdalena Medio	26.377	14.873	11.504
Nordeste	44.438	22.444	21.994
Norte	56.662	25.597	31.065
Occidente	49.237	17.295	31.942

Oriente	140.188	76.094	64.094
Suroeste	96.547	46.311	50.236
Urabá	116.033	67.856	48.177
TOTAL ANTIOQUIA	1.477.206	1.149.045	328.161

Cuadro No. 2

Hogares rurales y urbanos por subregiones en Antioquia, 2005

Fuente: Gobernación de Antioquia. Anuario Estadístico de Antioquia, 2011. Cifras del DANE, Censo 2005.

Con base en información de la Encuesta de Calidad de Vida (2011) que recoge la Gobernación de Antioquia, es posible conocer las diferencias que se presentan entre una vida desarrollada en entornos urbanos y rurales, donde se tienen consideraciones sobre la vivienda, aspectos demográficos de las personas que habitan la misma, el acceso a los servicios públicos y el capital humano y la seguridad social del hogar.

Subregión	2007			2009			2011		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
Antioquia	70,97	60,40	68,38	69,13	56,90	66,05	70,43	55,78	66,76
Valle de Aburrá	72,93	71,61	72,82	71,37	70,99	71,34	72,51	70,69	72,34
Bajo Cauca	61,59	47,47	54,88	58,97	43,90	52,67	60,80	47,16	55,09
Magdalena Medio	61,15	61,81	61,46	63,44	59,44	61,55	61,11	56,09	59,00
Nordeste	64,00	56,65	60,33	60,70	49,57	55,44	63,26	50,21	56,72
Norte	67,98	57,86	62,76	64,78	51,45	57,42	67,42	51,43	58,78
Occidente	63,06	55,00	58,73	62,02	53,39	56,34	65,07	52,41	56,78
Oriente	69,45	64,16	66,90	68,01	59,22	63,78	67,88	57,30	62,85
Suroeste	66,85	61,40	64,11	64,22	57,73	60,78	66,13	52,28	58,79
Urabá	63,25	51,00	57,44	59,69	41,80	52,50	62,58	41,87	54,10

Cuadro No. 3

Indicador de calidad de vida (ICV) en Antioquia y por subregiones

El indicador asigna a cada hogar un puntaje que varía entre 0 y 100. A medida que el valor del índice aumenta, las condiciones de vida del hogar mejoran.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2011

Con base en el cuadro No. 2, puede evidenciarse que en el periodo 2007-2011 la brecha en calidad de vida en el área rural crece de manera negativa en Antioquia: 12,6. Sobre el área urbana puede decirse lo mismo, salvo que la diferencia es ostensiblemente menor: 0,54. En términos generales, hay una reducción en la calidad de vida en todo el departamento, lo que habla de unas condiciones de vida inferiores en 2011 a las de 2007. En todas las subregiones el comportamiento es similar excepto en la del Bajo Cauca, donde el ICV de 2011 es superior al del 2007, lo que podría explicarse por el dinamismo de la actividad minera, entre otros aspectos. Cabe agregar que otras de las variables que marcan la diferencia en las condiciones de vida entre la zona rural y urbana del departamento son: calidad de la vivienda, baja escolaridad de los jefes de hogar y el acceso y la baja calidad de servicios públicos domiciliarios como agua potable, alcantarillado, recolección de basuras y gas o electricidad.

Al tratarse de un departamento con altos contrastes, conviene expresar que las diferencias particulares entre la vida rural y urbana pueden variar también por la subregión que se aborde. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el Nordeste, un territorio en esencia rural que posee un desarrollo urbano deficiente con poca conexión a otras regiones, pues en ella predominan aún los caminos de herradura como vía acceso a las carreteras principales y a las cabeceras municipales. Así pues, aunque esta subregión posea cabecera municipal que cabría considerar urbana, sus particularidades socioeconómicas la ubican aún como mayoritariamente rural.

1.2 Vocación productiva y uso del suelo

Siguiendo a Juan Luis Mejía, Antioquia tiene una vocaciones empresarial e industrial que no es reciente: “En 1828 arribaron a Antioquia tres extranjeros que formaron el núcleo definitivo para la consolidación de una verdadera industria: Carlos Segismundo de Greiff, Pedro Nisser y Tyrrell Moore” (Mejía, 2007). Estos empresarios comenzaron un proceso que identificó al departamento alrededor de la minería. Cuenta Mejía que ellos “fueron enseñando el manejo de las aguas, la construcción de socavones, la transformación de los minerales por el fuego, los procesos de recuperación de las jaguas, etcétera”. Así pues, el desarrollo industrial de Antioquia tiene como base el oro y el café, pero sería a todas luces impreciso pasar de largo e ignorar que la formación de una mano de obra capacitada para resolver problemas técnicos en esas áreas no hubiera sido posible sin el aprendizaje que trajo consigo la práctica en los socavones y los hornos de las minas. Eso sí, la misma sigue siendo una práctica relevante para subregiones como el Nordeste, el Suroeste y el Bajo Cauca; este sector ubicó a Antioquia en 2011 como la segunda mayor productora de oro del país, después del Chocó, y como líder en extracción de plata.

Departamento	2011	
	Oro*	Plata*
Antioquia	19.156	9.223
Chocó	27.915	6.955

Cuadro No. 4

Sector minero. Industria extractiva Producción de oro y plata 2011

*Cifras en miles de gramos

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

Pero Antioquia, claro, es más que eso. Comenzando por el banano en la subregión de Urabá, donde a 1993 se producían anualmente 740 mil toneladas de la fruta, casi todo con fines de exportación. De acuerdo con Héctor Rincón en su reportaje en el periódico La Hoja (publicado en 1993 y posteriormente recuperado en su libro Oficio periodista en 2001), luego del banano están:

... la papa con 308 mil toneladas. Y al café que con sus 212 mil consigue el primer puesto nacional. Y hay más: sin que se le pueda presentar como el líder de la diversificación, en Antioquia se da lo que da la tierra, y la tierra da mucho: da coco en mil 600 hectáreas sembradas ordenadamente para ello. Y espárragos, en 25 hectáreas. Además hay granadilla en cantidad y mamoncillo, anís e higo, para hablar de excentricidades agrícolas, antes del dato sobre los frisoles indestronables: hay 26 mil 89 hectáreas sembradas y entre todos los municipios el de mayor empeño en producirlos es Marinilla, con cuatro mil 650 hectáreas cultivadas de este vicio gastronómico (Rincón, 2001, p. 76).

La vocación agrícola que recuerda Rincón aún persiste. Como bien recupera Francisco Alberto Jaramillo (2013), se trata de un sector que tuvo una importante repercusión en la historia del desarrollo económico del país; entre algunos de sus efectos se encuentra la extensión por el sur de Colombia de toda la cultura antioqueña, la cual “remontó la cordillera central para llevar a lomo de mula, gastronomía, arte y costumbres, por parte de arrieros y colonos que abrieron caminos, expandieron la frontera agrícola, fundaron pueblos e hicieron más grande a Colombia” (Jaramillo, 2013).

El sector industrial es uno de los más importantes dentro de la economía antioqueña y del país, pues este departamento mostró a 2011 el crecimiento más elevado en el nivel nacional. Según las cifras de la Asociación Nacional de Industriales, “en 2011 el nivel de crecimiento fue de 6.2%, frente al 5.9% nacional. Los sectores que más crecimiento reportaron fueron textil-confección, calzado, alimentos, autopartes y automotores” (Gobernación de Antioquia, 2012a). Y dentro de este sector uno de los renglones más importantes para Antioquia lo ocupa la industria manufacturera. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) en 2007, “El sector manufacturero es uno de los motores principales para el crecimiento económico, pues favorece el paso de las actividades simples, basadas en recursos naturales y de escaso valor agregado, a actividades más productivas que generan más rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnológico y la innovación, ya que posibilitan un crecimiento más rápido en las capacidades de mayor calidad”. Las cifras de esta industria en Antioquia así lo demuestran, pues su representación porcentual dentro del PIB (15%) solo se ubica detrás de la capital del país (23%), sin ignorar el número de empleos que se generan (Antioquia: 148.916; Bogotá: 214.561):

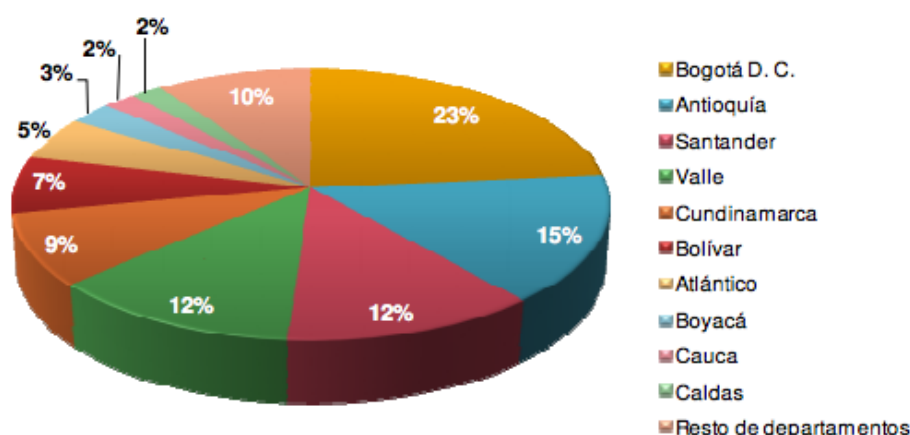


Gráfico No. 2
Industria manufacturera en Colombia 2010
Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005

Según muestran las cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2012), el 85% restante del PIB que aporta Antioquia a la nación se divide de la siguiente manera:

- Servicios financieros e inmobiliarios: 23,2%
- Otros servicios: 23,1%
- Administración pública y servicios sociales: 15,1%
- Comercio, restaurantes y hoteles: 14,4%
- Agropecuarios y minería: 8%

Es de notar que el desarrollo de esta industria en Antioquia tiene como principales centros el Valle de Aburrá (este reúne cerca del 60% de la población del departamento y el 70% de la actividad económica industrial y de servicios) y el Oriente (que abastece la demanda creciente del Valle de Aburrá, pero también se distingue por ser destino turístico), pero de la misma hacen parte el Occidente (tanto en alimentos y bebidas, como en la fabricación de productos metálicos y de muebles) y el Norte (con alimentos y bebidas, especialmente productos lácteos).

La presencia de cultivos ilícitos es una realidad que Antioquia no puede evadir con respecto al uso de sus suelos. Este fenómeno se presenta especialmente en la subregión del Bajo Cauca, donde aparece un área importante dedicada a fines por fuera de la legalidad. El informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de 2009 dice que en Antioquia estos cultivos se mantuvieron en promedio en 3.000 hectáreas entre los años 1999 y 2002; la situación toma tintes más negativos en los años posteriores, pues en lugar de reducirse, el número de hectáreas creció hasta las 9.926 en el 2007 (mientras en el año 2000 el área sembrada representaba el 1.6% del total nacional, en el 2005 ascendió al 7.5%). Sin embargo, en 2008 se presentó una reducción importante del 38%, es decir, 3.830 hectáreas. Dicha reducción obedece a la erradicación manual de 6.166 a 18.300 hectáreas. Entre los años 2009 y 2013 se logra apreciar una paulatina reducción de cultivos en Antioquia; entre 2012 y 2013 se alcanza una reducción del 23% (Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito, 2014, p. 17).

Departamento	Dic.-2007	Dic.-2008	Dic.-2009	Dic.-2010	Dic.-2011	Dic.-2012	Dic.-2013	% Cambio 2012-2013	% del total 2013
Nariño	20.259	19.612	17.639	15.951	17.231	10.733	13.177	23%	27%
Putumayo	14.813	9.658	5.633	4.785	9.951	6.148	7.667	25%	16%
Norte de Santander	1.946	2.886	2.713	1.889	3.490	4.516	6.345	41%	13%
Guaviare	9.299	6.629	8.660	5.701	6.839	3.851	4.725	23%	10%
Caquetá	6.318	4.303	3.985	2.578	3.327	3.695	4.322	17%	9%
Cauca	4.168	5.422	6.597	5.908	6.066	4.325	3.326	-23%	7%
Meta	10.386	5.525	4.469	3.008	3.040	2.699	2.898	7%	6%
Chocó	1.080	2.794	1.789	3.158	2.511	3.429	1.661	-52%	3%
Antioquia	9.926	6.096	5.096	5.350	3.104	2.725	991	-64%	2%
Bolívar	5.632	5.847	5.346	3.324	2.207	1.968	925	-53%	2%
Vichada	7.218	3.174	3.228	2.743	2.264	1.242	713	-43%	1%
Córdoba	1.858	1.710	3.113	3.889	1.088	1.046	439	-58%	1%
Valle del Cauca	453	2.089	997	665	981	482	398	-17%	1%
Vaupés	307	557	395	721	277	254	184	-28%	0,40%
Amazonas	541	836	312	338	122	98	110	12%	0,2%
Guainía	623	625	606	446	318	301	81	-73%	0,20%
Santander	1.325	1.791	1.066	673	595	111	77	-31%	0,2%
Arauca	2.116	447	430	247	132	81	69	-15%	0,1%
Magdalena	278	391	169	121	46	37	37	0%	0,1%
Boyacá	79	197	204	105	93	10	17	70%	0,04%
César						13	13	0%	0,03%
Caldas	56	187	186	46	46	16	8	-50%	0,02%
La Guajira	87	160	182	134	16	10	6	-40%	0,01%
Cundinamarca	131	12	0	32	18	0	0	0%	n.a
TOTAL	98.899	80.953	73.139	61.812	63.762	47.790	48.189	1%	100%

Cuadro No. 5

Cultivos de coca por departamentos en Colombia 2007-2013 (hectáreas)

Fuente: Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2013. Junio de 2014. Oficina de las Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC)

Una de las soluciones a esta situación, que se vive con fuerza también en los departamentos del Norte de Santander y Santander, se está generando mediante inversiones en desarrollo alternativo, las cuales buscan cambiar los cultivos ilícitos por la producción de cacao, caucho, café, palma y programas silvopastoriles. En el Bajo Cauca el interés se ha centrado en el denominado cordón cauchero-cacaotero como alternativa a los cultivos ilícitos, el cual es promovido por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura de Antioquia.

Otra subregión que ha presentado esta dificultad es el Oriente, específicamente el municipio de San Carlos. A 2010, el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en el municipio permitió conocer que persisten fuentes de ingresos ilegales en manos de desmovilizados, quienes mantienen o procuran conservar el negocio de distribución de drogas ilícitas.

1.3 Formas de participación y organización política

Antioquia, el departamento multirracia y multicultural que se ha tratado de esbozar hasta ahora, expresa históricamente una tendencia conservadora en su orden político. Sin embargo, allí se forja una tensión con la búsqueda del libre mercado, la vocación empresarial que le caracteriza desde su gestación. En parte se puede leer una correcta mirada por parte de Pedro Justo Berrío en el siglo XIX, pues en su discurso de posesión como gobernador en 1875 se refirió a Antioquia como un "pueblo moral y laborioso (...) en

donde ya casi no existe el espíritu de partido ni se habla de guerra, ni se trata de lo que entre nosotros se llama la política... en donde el espíritu de empresa se desarrollaba con entusiasmo".

Existe vocación de partido, claro que sí. Esta se ha movido entre el conservadurismo y el liberalismo, casi de manera intercalada. Es decir, tal y como ha sucedido históricamente en el país, Antioquia expresa una tendencia bipartidista en el máximo cargo del departamento, donde vale la pena rescatar dirigentes recientes como: Nicanor Restrepo, Juan Gómez Martínez, Álvaro Uribe Vélez, Guillermo Gaviria y Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y, el más reciente, Sergio Fajardo, personajes que se han destacado en el nivel nacional en el ámbito político, pero también en el empresarial, un binomio que atraviesa la existencia del departamento. Siguiendo a Jorge Orlando Melo, se trata de una composición especial: "El antioqueño tiene un carácter diferente al del resto de los colombianos, explicable en gran parte por su constitución racial y en parte por las dificultades del medio y el esfuerzo para superarlas" (Jorge Orlando Melo, 1982).

A pesar del bipartidismo, entre los dirigentes políticos ha prevalecido el interés de la región, de allí que sea común observar menos divisiones ideológicas y un trabajo cooperativo entre liberales y conservadores, a diferencia de lo que se observa en otras regiones de Colombia.

¿Sigue entonces Antioquia la construcción de partidos que se propone desde el nivel nacional? En efecto. Como lo reseña la historiografía desde el siglo XIX, no existen ni han existido partidos regionales con propuestas autonómicas o secesionistas, como sí se presenta en España o Canadá, para el manejo de asuntos públicos (María Teresa Uribe, 2004).

Un fenómeno político para el departamento se encuentra alrededor del exgobernador de Antioquia y expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Al llegar a la Presidencia de la República, este dirigente se convirtió en un aglutinador entre los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y más tarde consolidó una fuerza ideológica que pasó por la gestación del partido de la U y más recientemente el Centro Democrático. La aparición del uribismo se convirtió en eje movilizador de candidatos y de campañas, aunque sus constantes devaneos han derivado en una fragmentación política que devolvió a los partidos tradicionales su notoriedad (no necesariamente una confianza mayoritaria), dio paso a otras coaliciones y a resaltar la hegemonía política de quien finalmente se encuentre en el gobierno de turno. Lo anterior sirve como lectura para precisamente comprender la actual conformación por partidos de los alcaldes del departamento de Antioquia.

Partido	Número de alcaldías	Porcentaje
U	32	26%
Conservador	29	23%
Liberal	25	20%
Cambio Radical	14	11%
ASI	7	6%
Firmas	5	4%
AICO	3	2%
PIN	3	2%
Afrovides	2	2%
MIO	2	2%
Verde	2	2%
Coalición U, Conservador	1	1%

Cuadro 6
Conformación de las alcaldías por partidos políticos en Antioquia periodo
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Como se dijo más arriba y se refuerza mediante el cuadro No. 6, la conformación de los cargos sigue una tendencia bipartidista y el mayor número de cargos lo obtiene aquel partido que esté dirigiendo desde el nivel nacional. De allí que los porcentajes 26%, 23% y 20% correspondan a los partidos de la U, Conservador y Liberal, respectivamente. En pocas palabras, como bien lo titulara el medio colombiano La Silla Vacía en 2011, a propósito de las elecciones para gobernador y alcaldes ese año: “El mapa de los alcaldes muestra que los partidos políticos no importan”. Este escenario lo tiene identificado la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Sergio Fajardo, pues desde allí se propone trabajar la relación Estado–sociedad civil con el ánimo de construir una ciudadanía política que vaya más allá de la simple representación temporal por medio del voto y avanzar en la generación de una participación que fortalezca el escenario de lo público. En otras palabras, la posibilidad de encontrar puntos de convergencia para fortalecer la esfera de los derechos ciudadanos.

Prácticamente controvirtiendo lo que Jorge Orlando Melo expresara en 1982 alrededor de la legalidad en la cultura política antioqueña, la Gobernación de Antioquia se planteó desde 2012 enfrentar una problemática que si bien acá se propone para este departamento, hay que subrayar que se trata de un fenómeno de orden nacional que tiene unos focos con mayor o menor nivel de deterioro:

La cultura de la ilegalidad ha aumentado en grandes proporciones: el encuentro del narcotráfico con la política clientelista ha fortalecido la corrupción, convirtiéndola en una empresa criminal de marca mayor; se ha perdido la confianza en las instituciones del estado

y en lo público; la impunidad ha aumentado. De la picaresca del vivo que con simpatía tumba a quien puede, se ha evolucionado por parte de algunos poderosos a la legalización del todo vale, en donde el fin justifica los medios y cualquier atajo es bienvenido. (2012b, p. 11)

Esta debilidad en los procesos participativos contrasta con las posibilidad que se lee a partir de las cifras de la oficina de asesoría legal de la Gobernación de Antioquia, donde se registra la existencia de alrededor de 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro al 2011, mientras en áreas de educación, servicios comunitarios, servicios sociales y otros afines, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cuenta con cerca de 4.400 registros. ¿Esto qué significa? La existencia de un capital social para potenciar participación y la organización en política.

A la fecha se tiene un registro importante que facilita la organización en territorio: juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria. Estas organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con gran presencia en Antioquia y con una destacada participación de la ciudadanía. Según la Gobernación de Antioquia, el departamento cuenta con 5.672 juntas de acción comunal, 126 juntas de vivienda comunitaria, 126 organismos de segundo grado (Asocomunales), y 2 organismos de tercer grado (Federaciones), constituyéndose la organización comunal como herramienta clave para la planificación participativa del uso del territorio.

Otra de las vías para la conformación de escenarios diversos de participación se ha gestado mediante implementación de una política pública de juventud, por ello en los municipios de Antioquia se cuenta con una capacidad instalada para su uso de la siguiente manera: el 88% de los municipios han instalado el Consejo Municipal de Juventud, el 73% ha adoptado política pública de juventud, el 30% tiene casa de juventud, 82% formuló su plan municipal de juventud, el 38,5% de los municipios tiene Red de Jóvenes y 73,7% tiene cuenta ya con su Sistema Municipal de Juventud (Gobernación de Antioquia).

Se trata, finalmente, de una experimentación. Si bien ya hay pasos que incluso han sido decretados por el mismo Estado, no deja de ser una apuesta e incluso un enfrentamiento con la clase política tradicional, la cual puede ver en esta búsqueda de vías de participación de la ciudadanía, un intento de menoscabar sus mecanismos y maquinarias. Estas formas de participación buscan dar apertura para identificar dificultades, creatividad para generar alternativas y cooperación que haga posible el hallazgo de soluciones. Y, por supuesto, una forma de acercar la política desde escenarios que no se limiten al del día de las votaciones, pues allí el escenario, como ya lo viéramos con los alcaldes, sigue siendo el mismo con respecto a las filiaciones políticas. Ello, vale la pena entrar a precisar, no se menciona como algo a lamentar, sino como muestra de la prevalencia de una construcción a partir de una política de orden nacional sobre una mirada de lo regional.

1.4 Breve historia del conflicto armado

El conflicto armado en Colombia tiene cerca de 60 años. Son varios los trabajos que permiten abordar el tema en cuestión y que dan muestra de que este conflicto posee patrones heterogéneos desde la victimización y los actores que lo conforman. Para empezar, resulta oportuno acudir a un pequeño y rápido recuento que hiciera Juan Luis Mejía en la revista Semana sobre el conflicto armado en Antioquia:

En la década de los 80 se vivieron dos fenómenos concomitantes que afectaron de manera profunda la sociedad antioqueña: por un lado, la crisis del modelo industrial, y por otro, el surgimiento del poder del narcotráfico. La economía paralela desestabilizó por completo las estructuras sociales y la mafia impuso la ley del terror. En 1991, la ciudad de Medellín rompió todos los récords mundiales de homicidios. El símbolo de esa época de terror lo representó el asesinato del gobernador Antonio Roldán Betancur. Desmantelados los carteles de la droga, el poder de la guerrilla ocupó su lugar e implantó otra época de terror, que culminó con los asesinatos del secuestrado gobernador Guillermo Gaviria Correa y de su asesor de paz, el ex ministro Gilberto Echeverri Mejía (Mejía, 2007)

La cifra, ya se mencionaba, es determinante porque ayuda a acercarse a la magnitud de los hechos violentos. Sin embargo, ello ha dado como resultado la invisibilización de violencias contra la población civil por otras violencias. Incluso, ese interés ha llevado a que las profundidades del conflicto armado en el país no se hayan comprendido aún. Para la muestra, el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013) permitió conocer que el número de muertos en el país era de una dimensión mayor a la que se tenía registrada: en Colombia se estimaban 60.000 víctimas, pero el informe llevó a conocer que la cifra alcanza las 220.000 mil (entre 1958 y 2012), donde el 82% de ellas hacían parte de la población civil y el 18% restante las partes combatientes.

Las razones para entender la desproporcionada diferencia que se tenía en las cifras de las víctimas no son fáciles de encontrar, pero es cierto que ante el esclarecimiento de los factores que han prolongado y escalado el conflicto armado empiezan a surgir intereses y actores. Siguiendo la presentación que hiciera en la Universidad Eafit en 2013 Andrés Suárez (miembro del equipo investigativo del informe ¡Basta Ya!), dichos factores son:

- Problema agrario
- Miedo a la democracia
- Narcotráfico
- Internacionalización del conflicto
- Fragmentación territorial e institucional del Estado

Dichos factores hablan de una marcada tensión entre la vida política y la economía, a diferencia de los conflictos en los países asiáticos o africanos donde las confrontaciones se

han gestado por razones de identidad religiosa, étnica o regional (Pizarro, 2004, p. 52). Y esa relación que genera y agrava la violencia se expresa de un modo puntual: la inequidad. Para el Banco Mundial (2005) son África y Latinoamérica y el Caribe los dos continentes con mayor inequidad, donde Colombia se ubicaba para ese entonces en el cuarto lugar, sobrepasado por Brasil, Bolivia y Paraguay. Asimismo, es de destacar que el conflicto armado se ha prolongado por la existencia de distintos actores armados a lo largo de estos años: guerrillas, paramilitares y lo que Granada, Restrepo y Tobón (2009) acuñan como neoparamilitares (paramilitares que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz en 2007). Algunos de sus integrantes son conocidos hoy como las Bacrim).

Dichos factores y actores permiten hablar de cuatro periodos del conflicto, como bien lo recupera en su tesis de maestría Iván Mauricio Durán (2011): i) Período de ajuste (1988-1991), ii) Período de estancamiento (1992-1995), iii) Período de recrudecimiento (1996-2002) y iv) Período de reacomodamiento (2003-2008). Ahora, en lo que respecta a Antioquia sobre estos periodos, puede decirse:

El primer período se destaca en Antioquia por la participación de las guerrillas, específicamente las FARC-EP. De acuerdo con Durán, estas mantenían acciones armadas en algunos municipios del departamento de Antioquia, específicamente en Urabá. Para esta fase las acciones armadas de los paramilitares eran escasas y se desarrollaban esencialmente en Antioquia, donde se les relacionaba con bandas criminales o mafias del narcotráfico.

El segundo periodo, el de estancamiento, no tuvo mayor notoriedad en Antioquia debido a la disminución de la actividad armada de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, además de su búsqueda de expansión territorial en Colombia: la primera hacia el Magdalena Medio y suroriente del país; la segunda, hacia Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Magdalena. Por su lado, las actividades de los paramilitares en Antioquia seguían siendo relacionadas con hechos aislados alrededor del narcotráfico y no como parte de un conflicto armado nacional.

Con respecto al periodo de recrudecimiento (tercer periodo) se encuentra la consolidación del paramilitarismo en el país, teniendo como ejes de las acciones armadas ilegales a Antioquia, Santander, Norte de Santander, Magdalena y el Meta. El ELN aumentó también su actividad armada y las FARC siguieron incrementando sus acciones y llegaron al sur de Colombia, donde antes no realizaban acciones relacionadas con el conflicto. Este crecimiento de las guerrillas se identifica como parte de producción de hoja de coca en la región Andina, la cual se concentró en los departamentos de Norte de Santander (70% de la producción entre 1999 y 2001), Santander (25%) y Antioquia (19%).

Este periodo de recrudecimiento dejó en el departamento de Antioquia fuertes episodios contra la sociedad civil, como el ocurrido en el nordeste antioqueño (específicamente

Segovia) a manos de los paramilitares, donde además de las masacres se desarrollaron desapariciones forzadas y se contó con la anuencia de las fuerzas armadas del Estado. Según recuerda el diario El Espectador en su editorial del 10 de noviembre de 2008:

La masacre de Segovia puede ser considerada, por muchos motivos, un caso emblemático en la historia reciente de la violencia colombiana (...) En la masacre, como en tantas otras perpetradas por los paramilitares, la complicidad con las fuerzas del orden fue absoluta. Pese a que el entonces comandante de la XIV Brigada, general Raúl Rojas Cubillos, les atribuyó el ataque a las Farc y el Eln, con el tiempo se pudo comprobar que la Policía se encerró en el Comando ubicado en la plaza central y el Ejército Nacional se acantonó en las instalaciones de la base del Batallón Bomboná. Ni los unos ni los otros acudieron a proteger a la población y, por el contrario, hubo participación activa a partir del apoyo logístico y táctico (El Espectador, 2008).

Dicho recrudecimiento llevó también a que entre los años 1997 y 2007 se diera la movilidad del conflicto al oriente antioqueño. Para entonces la subregión se posicionaba en el sector industrial, aunque ese avance fue opacado por el aumento de las guerrillas en sus municipios. Clara Inés García y Clara Aramburo (2011) recuerdan que “los grupos guerrilleros se asentaron en torno de los municipios de embalses y de San Luis –donde recientemente se había inaugurado la autopista Medellín-Bogotá–” (p. 57). La apertura de este proyecto llevó a que la subregión se convirtiera en espacio valioso para la guerrilla. Sin embargo, esta no era la única interesada: llegaron también los paramilitares y su estrategia contrainsurgente. ¿Su propósito? Contar con un poder propio. “Todos ellos fueron sucesos que marcaron el inicio del escalamiento del conflicto y la crisis humanitaria que viviría el Oriente antioqueño durante los siguientes años” (García y Aramburo, 2011, p. 57).

Sobre ese mismo lapso, que se encuentra entre los periodos de recrudecimiento y reacomodamiento, hay una serie de acciones que hablan del envilecimiento del conflicto por parte de los paramilitares y de la participación de algunos miembros del ejército colombiano. Así lo reseña el portal Verdad Abierta:

...de múltiples asesinatos, masacres, reclutamiento masivo de menores, desplazamiento de personas y atrocidades como descuartizamiento de personas. Muchas de estos crímenes, según han dicho los propios desmovilizados, se habrían cometido con anuencia de miembros de la fuerza pública, en particular de la Brigada XVII con sede en Carepa, Antioquia. De hecho en 2008 la Fiscalía vinculó al General en retiro Rito Alejo del Río a la investigación por la tortura, decapitación y asesinato de un campesino del Urabá Chocoano, cometido por los hombres al mando de “El Alemán”, durante una operación que los desmovilizados han caracterizado como “conjunta” entre militares enviados por del Río, y paramilitares del Elmer Cárdenas (Verdad Abierta, SF).

El cuarto periodo trajo consigo una disminución de las actividades armadas de las guerrillas gracias a la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, las acciones de los paramilitares siguieron aumentando su curso y se enfocaron en Arauca, Santander, Antioquia, Magdalena y Norte de Santander, además de otras acciones en Caquetá, Putumayo y Nariño. Sin embargo, para el año 2003 la disputa entre guerrillas y paramilitares en el Oriente antioqueño seguía en pie. Eso sí, los paramilitares se fueron disgregando en pequeños subgrupos por la desmovilización y diversos desencuentros ideológicos al interior del grupo armado. Por ejemplo, El Bloque Metro, que por años mandó en la región, fue perdiendo apoyo hasta que tropas del Cacique Nutibara, por órdenes del líder paramilitar Carlos Castaño, los sometieron en el municipio El Jordán.

Como se puede apreciar en este corto recorrido por el conflicto colombiano, pero teniendo como eje central a Antioquia, son varios los daños que se han configurado. Por un lado está el desplazamiento forzado, el cual se generó con gran fuerza por los paramilitares. Aunque es claro que con el paso de los años esta situación se ha reducido en algunos departamentos de Colombia, el número de personas que padecen esta situación sigue siendo alto. Según Verdad Abierta (2014), mientras en 2012 en Medellín (Antioquia) se contaba con 14.206 desplazados, en 2013 la cifra se redujo a 7.963 (para estas fechas, los departamentos con mayor desplazamiento son Nariño y Cauca). Empero, a 2014 se siguen generando en Antioquia un alto número de desplazamientos en: Bajo Cauca, Valle de Aburrá, Urabá, Norte y Nordeste. De este fenómeno hacen parte actualmente “bandas criminales como ‘los Paisas’, ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, los Frentes 4, 5, 18 y 36 de las Farc y un pequeños grupo del Eln conocido como Compañía Capitán Mauricio” (Verdad Abierta, 2014).

1.5 Referentes bibliográficos

Betancur, B., et al. (1988). Antioquia, entre la tradición y la modernización. Historia de Antioquia (pp. 9-11). Medellín: Suramericana de Seguros.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2012). Importancia de la industria en la economía antioqueña. Medellín. Recuperado de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2012/rueda-de-prensa-industria-en-antioquia.pdf>

Correa, M. V. (2013, agosto). Santa Fe y Medellín, eternas capitales. El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/santa_fe_y_medellin_eternas_capitales/santa_fe_y_medellin_eternas_capitales.asp

DANE. Censo general 2005. Déficit de vivienda. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf

Díaz, A.; Sánchez, F. Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia. Recuperado de <http://economia.uniandes.edu.co/content/download/1974/11454/file/D2004-18.pdf>

Duque, L.; Sierra, C.; Montoya, N. (2009). La violencia en el Valle de Aburrá. Caminos para la superación. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad de Antioquia.

Durán, I. M. (2011). Conflicto armado y crecimiento económico municipal en Colombia. Tesis de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

El Espectador (2008). La masacre de Segovia: un caso emblemático. Recuperado de <http://www.elespectador.com/articulo89533-masacre-de-segovia-un-caso-emblematico>

Espinosa, N. (2012). Impactos del paramilitarismo en la región Urabá/Chocó 1998-2006. Claves para la lectura de las afectaciones colectivas. Recuperado de <http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v12nro2/pdf/impactos-paramilitarismo.pdf>

García de la Torre, C. I., Aramburo Siegert, C. I. (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia: Oriente y Urabá antioqueños 1990- 2008. Colombia: Colección territorio, poder y conflicto.

Giraldo, J. (2014, septiembre). Medellín 2014. El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/bancoconocimiento/m/medellin_2014/medellin_2014.asp

Gobernación de Antioquia (2012a). En 2012 el sector industrial antioqueño crecerá más. Recuperado de <http://antioquia.gov.co/index.php/gobernador/noticias/7040-en-2012-sector-industrial-antioqueno-crecera-mas>

_____ (2012b). Fundamentos. Recuperado de http://antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/3_Fundamentos.pdf

Granada, S.; Restrepo, J. A.; Tobón, A. (2009) Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano. Restrepo, J. A. y Aponte, D. Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Jaramillo, F. A. (2013, agosto) La gesta de la independencia. El Colombiano. Recuperado de

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_gesta_de_la_independencia/la_gesta_de_la_independencia.asp

Jaramillo, R. L. (1988). La colonización antioqueña. Historia de Antioquia. Medellín: Suramericana de Seguros.

Mejía, J. L. (2007, octubre). La gesta antioqueña. Semana. Recuperado de <http://www.semana.com/especiales/articulo/la-gesta-antioquena/88996-3>

Melo, J. O. (1982). Política y políticos de Antioquia. Ponencia leída en 1979 y publicada en memoria del simposio Los estudios regionales en Colombia: el caso de Antioquia. Medellín: FAES.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2013. Recuperado de http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2013_web.pdf

Olaya, C. H. (2012). Nunca más contra nadie. Medellín: Cuervo Editores.

Pizarro, E. (2004). Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Editorial Norma.

Rincón, H. (2001). Oficio periodista. Medellín: Hombre Nuevo Editores.

Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia (2011), Antioquia, Colombia: Informe de Auto-Evaluación. Estudios de la OCDE: Educación Superior en el Desarrollo Regional y de Ciudades. IMHE. Recuperado de <http://www.oecd.org/edu/imhe/49183012.pdf>

Spagat, M.; Restrepo, J. A.; Vargas, J. F. (2006). El conflicto en Colombia. ¿Quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003). IEPRI. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: IEPRI - Editorial Norma.

Suárez, A. (2013). ¡Basta ya! en Eafit. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/en/centro-audiovisual/videos/basta-ya-en-eafit>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2013). Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012. Recuperado de <http://www.cjviracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf>

Uribe, M. T., (2000). El desplazamiento forzado en Antioquia. Medellín: IEP.

_____ (2004). Historia política y región: un modelo para armar. Estudios regionales en Antioquia (pp. 75-94). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Verdad Abierta (SF). Bloque Elmer Cárdenas de Urabá. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/la-historia/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba->

_____ (2014). Los nuevos focos del desplazamiento forzado en Colombia. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/5361-los-nuevos-focos-del-desplazamiento>

CONTEXTO SUBREGIÓN URABÁ

2.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos

La subregión de Urabá, ubicada al noroccidente de Colombia, en realidad no corresponde a una subdivisión administrativa de carácter nacional, sino más bien a una división geográfica derivada de una serie de acontecimientos históricos que unen de alguna forma al Gran Urabá, cuyo territorio se adentra en el de tres departamentos colombianos: Antioquia, Chocó y Córdoba. La zona es rica en especies de fauna y flora y en fuentes fluviales y minerales y cuenta con una excepcional conexión marítima y fluvial hacia el exterior. La subregión se asienta en torno al golfo de Urabá, que limita con Panamá y hace parte del llamado Chocó Biogeográfico, zona supremamente biodiversa, la cual disfruta de buenas condiciones geológicas y climáticas. Urabá está compuesto por 18 municipios: 11 de ellos en Antioquia (Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí, al norte; Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, al centro; y Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte, al sur); 5 en Chocó (Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Capurganá) y 2 en Córdoba (Tierralta y Valencia).

La colonización de Urabá (producida de forma un tanto arbitraria), propició condiciones que marcaron el sino de la subregión en pocos años. Sus procesos de poblamiento se produjeron de forma más o menos paralela a la expansión de grupos armados en el país: durante la década de los 60 a la subregión comenzaron a llegar grupos de campesinos que acabaron produciendo un cambio radical en las dinámicas propias de una zona fronteriza, donde hasta entonces primaban los pequeños cultivos, la pesca artesanal y otras prácticas de bajo calibre. Para la época, sin embargo, comienza a producirse un vuelco hacia la economía agroindustrial, en parte como consecuencia de dinámicas nacionales (donde la incipiente economía de mercado colombiana comenzaba a integrarse a un sistema internacional de intercambios comerciales), en parte porque pequeños y medianos capitales comenzaron a fijarse en las potencialidades de los ecosistemas que rodeaban el golfo de Urabá. La subregión comenzó además un proceso de urbanización acelerado que a día de hoy no se detiene.

La convivencia entre esos procesos de poblamiento y la expansión de las guerrillas entre la década de los 60 y comienzos de la década de los 90 produjo no sólo expresiones violentas de diversa índole, sino sobre todo dinámicas de organización política bastante fructíferas. La colonización campesina llevó a Urabá segmentos de población particularmente desfavorecidos, desplazados por la violencia o por sus carencias, que llevaron sus problemáticas a la zona: así, limitaciones para el acceso a la tierra (que ya entonces comenzaban a apropiarse grandes y medianas agroindustrias), exclusión política y económica, puesto que la subregión, a pesar de haberse integrado a la economía nacional a través de la formalización de sus prácticas económicas, siguió estando apartada del resto del país incluso materialmente (las carreteras de acceso a Urabá son pocas y están en precarias condiciones incluso a día de hoy), e incursión de grupos armados (con todas las

complejidades que esto entraña), dieron forma a dinámicas de organización política y armada particularmente complejas.

2.2 Vocación productiva y uso del suelo

En palabras de Juan Ricardo Aparicio, la de Urabá “ha sido una historia de imperios, de encuentros coloniales, de la formación misma del Estado-nación, de élites nacionales y regionales, de partidos políticos, de guerrilla y de grupos paramilitares” (2009, p. 92). Para entender estos fenómenos hace falta saber primero que la colonización de la zona (en realidad poco homogénea), produjo una leve fragmentación de la subregión en torno a ciertos ecosistemas y sus posibilidades de explotación: hacia el norte de Urabá, una llanura de inundación extendida ha propiciado la ganadería extensiva y, en menor medida, la pesca. Allí, Urabá ha debido enfrentarse a procesos de desecación acelerados y a una desmedida ampliación de la frontera agrícola que produjo al menos dos efectos: las comunidades afrocolombianas e indígenas, pobladores originales de la zona, fueron paulatinamente desplazados (a menudo por la fuerza) hacia otras zonas del Urabá, y la deforestación derivó en reducción significativa de algunas especies de fauna y flora (García y Aramburo, 2011 p.). Hacia el centro de la subregión (la zona más poblada y desarrollada económicamente), impera la agroindustria bananera y un sector servicios que gira en torno a ese mercado. En dicha zona se presentaron también crudos conflictos por la posesión de la tierra, en torno a la cual confluyeron los grupos raizales (que reclamaban sus territorios ancestrales), las multinacionales, los grupos guerrilleros (que a menudo se enfrentaron entre sí), el paramilitarismo de todo tipo (desde aquel ejercido por pequeños grupos de mercenarios creados para proteger los intereses de sectores particulares, hasta aquellos otros grandes grupos con influencia en amplios sectores del país, como las Autodefensas Unidas de Colombia) y los narcotraficantes, a menudo aliados con alguno de los actores armados ya mencionados.

El resto de la subregión está compuesta por estuarios, bosques de manglar y zonas selváticas, ecosistemas propicios para el flujo de actores armados, drogas y estructuras militares que fue y sigue siendo aprovechado por distintos grupos armados. Todas estas particularidades crearon en la zona una compleja relación entre las dinámicas de la región y la soberanía del Estado central. La insurgencia (encarnada sobre todo en las guerrillas de las FARC-EP y EPL), llegó a Urabá en la década de los 60 encarnando los ideales de guerrillas campesinas cuyos intereses coincidían con los de aquellos pobladores enfrentados a la concentración de la tierra en grandes latifundios o empresas agroexportadoras, traduciendo a “conceptos revolucionarios las problemáticas de los procesos de colonización campesina” (García y Aramburo, 2011, p.270). La ya mencionada colonización heterogénea de Urabá creó múltiples formas de organización política, pues diversos patrones culturales respondieron de formas distintas ante la acción política y armada de las guerrillas, lo que dio lugar a cacicazgos políticos a menudo contradictorios.

La impotencia del Estado para ejercer soberanía creó en Urabá un orden socio-político fragmentado en el que la disputa por la soberanía se expresó de formas violentas. La

consolidación de las guerrillas en los años 70 pronto generó conflictos con los propietarios de grandes porciones de tierra y con emporios agroindustriales, situación que comenzó a dar forma a los grupos paramilitares financiados por particulares. El auge económico propiciado por el Gobierno en la región bananera escapó a su control, alterando sensiblemente con su expansión desmedida los patrones de migración, propiedad y empleo, y dividiendo incluso a las comunidades afrodescendientes, a menudo enfrentadas a dos intereses contradictorios: la defensa de sus territorios y tradiciones ancestrales, o la inclinación de algunos sectores hacia la negociación con grupos particulares en busca de integrarse en el heterogéneo mercado de Urabá, situación que derivó en un “crecimiento económico, una concentración territorial y una descomposición de formas de colonización campesina” (Ramírez, 1993, p.30-31).

Así pues, la concentración institucional en la industria bananera (y, por ende, en la zona Centro de Urabá), ocasionó una paulatina marginación del resto de la subregión, que vio concentrarse en las grandes producciones bananeras la mayor parte de los recursos públicos, la presencia estatal (a través no sólo del Ejército sino de misiones institucionales e instalación de servicios primordiales) y los intereses económicos extranjeros. Se propiciaron procesos de migración desde otras zonas de Urabá, y la insurgencia asumió la voz de los reclamos de grandes masas de campesinos excluidos de los procesos productivos a los que la subregión comenzaba a integrarse, acentuando la fragmentación de la misma.

2.3 Formas de participación y organización política

En Urabá las formas de organización política han estado íntimamente relacionadas con la acción armada de los actores con los que ha convivido. Vale la pena recordar que el territorio estuvo en manos, inicialmente, de comunidades indígenas (algunas de las cuales sobreviven en resguardos), a las que luego se sumaron comunidades afrodescendientes y, finalmente, todos los actores que se han mencionado anteriormente. Los colonos campesinos de Urabá llegaron desde otras regiones de Colombia donde la para entonces vigente guerra civil entre el Partido Liberal y el Partido Conservador (comúnmente llamada La Violencia) o la exclusión política y económica los obligó a desplazarse, trayendo a Urabá todos sus reclamos e ideas políticas. Su llegada, sin embargo, propició nuevos conflictos allí donde la propiedad de la tierra tocaba intereses de comunidades ancestrales (fueran estas indígenas o afrodescendientes) u otros de carácter particular, como los de la para entonces fuerte industria maderera, las incipientes iniciativas de construcción, inversionistas y grandes productores de banano.

En medio de esta compleja red de relaciones conflictivas, los grupos insurgentes se expandieron de forma simultánea a los movimientos colonizadores, intentando capitalizar sus reclamos en torno a la lucha armada y la disputa de la soberanía al Estado central. Dicho objetivo fue parcialmente alcanzado más por las dinámicas que logró instaurar en la población de los territorios que ocupaba que por un reclutamiento masivo de guerrilleros entre las masas colonizadoras. Las guerrillas llegaron a convertirse, en algunas zonas de Urabá, en poderes de facto, capaces de administrar justicia, recaudar impuestos (incluso a

través de la extorsión a grandes propietarios), organizar política y socialmente a la población y agruparla en torno a sus intereses (Uribe de Hincapié, 2001, p.).

Sin embargo, la dinámica del conflicto armado a nivel nacional afectó sensiblemente dicha ecuación, a medida que las guerrillas (y especialmente las FARC-EP), pasaba de ser una guerrilla campesina a una con intereses políticos mayores (que la obligaban a acercarse a los movimientos políticos ciudadanos). Tales objetivos fueron llevando a la guerrilla a incursionar en prácticas ilegales para financiarse: la extorsión a gran escala, secuestro, asesinatos selectivos, narcotráfico y, en menor medida, minería ilegal, hicieron difusa la frontera entre las guerrillas y otros grupos delincuenciales que ya operaban en la región, y el interés geoestratégico de la región (con su salida hacia Panamá), incrementó sensiblemente la violencia en la zona, con lo que la relación entre ciertos segmentos sociales y las guerrillas comenzó a dislocarse.

La historia de la subregión con la industria bananera, además, ha sido particularmente compleja, puesto que su incentivación y crecimiento ha enriquecido a lo largo de muchos años la región central de Urabá sin que esto se traduzca en mejores condiciones de vida para el resto de la región o aún para los habitantes de la región central, que han debido enfrentarse a acuciantes procesos de acaparación de tierras (en principio) y de despojo y desplazamiento (después). Aunque la mayor parte de los cultivos bananeros comenzaron a expandirse durante la década de los 60, ya a comienzos del Siglo XX el llamado Consorcio Albingia había obtenido permiso del Congreso Colombiano para sembrar la variedad Gros Michel de banano en la región. Sin embargo, fue en la década de los 60 cuando las grandes exportadoras bananeras promovieron masivamente el cultivo de la fruta en torno al Golfo de Urabá, por ser esta una zona libre de tormentas tropicales, con suelos sanos y casi deshabitados. En 1963, la Frutera Sevilla (filial de la célebre United Fruit Company) llegó a la región y se enfrentó a una incipiente oposición por parte de algunas comunidades afro e indígenas. Pese a esto, la empresa ofrecía a los nuevos colonos (que iban creciendo en número, llegando a Urabá como se llega a la tierra prometida), cuya relación con la agricultura se limitaba, en la mayoría de los casos, a la propia sostenibilidad, posibilidades de asesoría técnica y construcción de infraestructura necesaria para integrarse al mercado mundial del banano, además de empleo y crecimiento económico.

Los primeros conflictos con esta empresa dieron lugar, en 1966, a la creación de Uniban, una pequeña asociación de productores bananeros con la intención de desligarse de Frutera Sevilla para organizar por sí misma la exportación y comercialización del banano producido por sus miembros. Entre Uniban y la Frutera se produjeron múltiples conflictos que derivaron en constantes amenazas de suspensión de contratos por parte de la segunda y, finalmente, en un crecimiento considerable de la primera, que llegó a crear su propia marca (Turbana) y a exportar sus productos hacia Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la dinámica de la región (a la que arribaban cada vez más colonos y grandes capitales inversionistas), fue potenciando la concentración de la tierra y acabó construyendo un sistema de producción que derivó en múltiples conflictos: la zona Centro de Urabá se

convirtió en una aglomeración de grandes haciendas con muy pocos dueños subcontratando trabajadores en precarias condiciones laborales. La paulatina llegada de otras grandes empresas como Banafrut, Tropical, Banarrica o Banur, propició ciertas alteraciones en la relación trabajador-propietario dentro de la industria bananera. Ahora bien, durante la década de los 80 nacieron múltiples sindicatos bananeros, como Sintagro y Sintrabanano, que alcanzaron capacidad de negociación y de presión respecto a las grandes agroindustrias, llegando a promover protestas, paros y cortes de producción.

La impotencia del Estado central para ejercer soberanía en la zona derivó en que múltiples actores (entre los que se contaban no sólo las grandes bananeras y sus sindicatos, sino también las guerrillas y algunos movimientos civiles aglutinados en torno a Juntas de Acción Comunal) se enfrentaron constantemente y de múltiples formas por el control de la zona. Sumados todos los problemas (algunos de índole laboral, otros en torno a la concentración de la tierra, llegando incluso a conflictos ideológicos sobre el funcionamiento de los medios de producción), fueron dando forma al Urabá conflictivo de finales del Siglo XX y comienzos del XXI.

Las guerrillas de las FARC-EP y el EPL, que se habían unido en torno a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar¹, trabajaban juntas en la región, llegando incluso a integrar en un solo sindicato (Sintrainagro) a distintos movimientos sindicales (algunos de ellos, armados). No sólo trabajaban conjuntamente en la ejecución de acciones guerrilleras, en el cobro de extorsiones a grandes propietarios y demás acciones armadas, sino que, desde mediados de la década de los 80, se enfrentaron a los fuertes grupos paramilitares que comenzaban a cometer masacres en la zona bananera. De esta época precisamente data la creación, por parte del EPL, de milicias campesinas. La mayor parte de sus miembros fueron reclutados de las fincas bananeras sometidas a los embates del paramilitarismo. A estas acciones los grupos paramilitares comenzaron a responder despojando tierras y apoderándose, de facto, de rutas propicias para el narcotráfico.

Fue en esa época cuando nació el ya mencionado movimiento político Unión Patriótica, en torno al cual se aglutinaron FARC-EP y EPL, y fue también en esa década (exactamente en 1988), que se produjeron en Colombia las primeras elecciones democráticas de alcaldes, donde la UP ganaría varias alcaldías en la región de Urabá. Así, durante algunos años, FARC-EP y EPL no sólo encauzaron políticamente los reclamos campesinos y sindicales, sino que trabajaron en conjunto tanto desde la acción armada como desde la política institucionalizada, hasta que, en 1991, 640 combatientes del EPL se desmovilizaron e integraron el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. En principio, el movimiento permitió el trabajo conjunto con las guerrillas y participó en las elecciones de 1991 en coalición con la Unión Patriótica, pero un pequeño grupo de esos guerrilleros desmovilizados retomó repentinamente las armas alegando traición por parte del movimiento, desatando en contra de sus miembros una persecución armada a la que pronto se sumaron las FARC-EP, y que llevó a algunos miembros de Esperanza, Paz y Libertad a

¹ El apartado *Conflicto armado* desarrolla cómo se llegó a esta asociación.

rearmarse conformando los llamados Comandos Populares. Esa situación no sólo fragmentó la participación política y los movimientos sociales en Urabá, sino que mermó el poder e las guerrillas y permitió a los grupos paramilitares ganarles terreno. Estos últimos desataron también una oleada de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica a escala nacional, que en Urabá derivaría en su práctico exterminio y contribuiría, igual que todo lo anteriormente narrado, a tornar violentas ciertas iniciativas sindicales y sociales, complejizando aún más las ya conflictivas relaciones entre grandes propietarios, paramilitares, guerrillas, colonos y movimientos sociales.

Esas nuevas lógicas dieron lugar a una serie de reacciones civiles de diversa índole. Aparecen movimientos sociales de resistencia al conflicto armado, la mayoría de ellos entre comunidades afrodescendientes y algunas agrupaciones campesinas que intentaron desligarse de las guerrillas por medio de acciones no violentas. Gran parte de estos movimientos se limitaba a promover iniciativas de paz, formas alternativas de desarrollo o de convivencia entre actores en conflicto. Sin embargo, dichas iniciativas se produjeron simultáneamente a otras que dieron sustento a ejércitos privados creados para proteger intereses particulares del accionar de las guerrillas. Esto se transformó, durante la década de los ochenta, en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, más tarde integradas a las Autodefensas Unidas de Colombia (de carácter nacional). La aparición de dichas organizaciones no sólo complejizó el conflicto, puesto que los enfrentamientos armados por el control del territorio se recrudecieron, sino que dificultó formas de organización y participación política alternativas. La radicalización del conflicto y de sus métodos produjo una tácita satanización de la neutralidad profesada por algunas comunidades y las convirtió en blanco de los actores armados en algunas situaciones.

Las formas de participación política convencionales (elecciones presidenciales, en principio, y de alcaldes y gobernadores, después) también se vieron notablemente influenciadas por los actores armados, a menudo aliados con los cacicazgos regionales. Los grupos paramilitares alcanzaron gran poder en la década de los 90, expulsando a las guerrillas de buena parte de Urabá y acaparando las rutas estratégicas para el narcotráfico, del que fueron asiduos aliados. En medio de la confrontación, se produjeron diversas masacres y acciones violentas que reconfiguraron de diversas formas las territorialidades de Urabá, generando desplazamiento y alterando algunas prácticas económicas menores. De este contexto surgieron iniciativas como la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como respuesta a la acción violenta de los paramilitares, razón por la cual llegó a vinculársela, incluso desde el Gobierno Nacional, con las guerrillas. Esa fue precisamente la dinámica del conflicto a la que debieron someterse las iniciativas de organización política alternativas: respuestas violentas de parte de ciertos sectores armados que asociaban sus iniciativas con las del enemigo.

En ese contexto llegaron las misiones internacionales a Urabá. ACNUR, ICRC, OEA, Médicos sin Fronteras y Oxfam, entre otras organizaciones, abrieron oficinas en la región, una de las más vulnerables de Colombia. Su presencia también influyó sobre las formas de

organización política regionales, puesto que las iniciativas locales se integraron a estas, de las cuales recibieron apoyo logístico y económico. Esto propició la suscripción de dichos grupos a las dinámicas del discurso internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y permitió la llegada de algunos grupos adscritos a la corriente de educación popular en América Latina (Aparicio, 2009).

Actualmente, en la región persisten iniciativas civiles de diversa índole: movimientos sociales con proyectos de paz y convivencia (como la ya mencionada Comunidad de Paz de San José de Apartadó), pequeñas agrupaciones de víctimas asociadas en torno a múltiples labores (como mantener la memoria histórica del conflicto en Urabá o encontrar los restos de personas desaparecidas), y otras tantas organizaciones de reclamantes que luchan por retornar a las tierras de las que fueron desplazados o recuperar los predios de los que fueron violentamente despojados. Sin embargo, la presencia de actores armados íntimamente vinculados a los grupos paramilitares desmovilizados, entre los cuales perviven individuos con intereses en torno a las tierras reclamadas, ha desatado reacciones violentas en contra de estas organizaciones, amenazando constantemente a sus integrantes y asesinando a algunos de ellos, razón por la cual persiste en la región un clima de incertidumbre y violencia generalizada.

2.4 Breve historia del conflicto armado

El Urabá antioqueño, la esquina geográfica que no solo conecta a Medellín con el mar, sino que se convierte en una de las grandes posibilidades colombianas de interacción con el mundo, tiene la particularidad de conjugar las riquezas naturales suficientes para atraer el asentamiento de grupos armados y otros, que al igual que los primeros, tienen intereses económicos en esta región, lo que la complejiza y caracteriza; y es que se trata de un territorio selvático, con el río Atrato como eje fundamental de sus dinámicas y con la imponente salida al mar Caribe como otra de sus principales cualidades.

Los diferentes actores irregulares han aprovechado sus condiciones geográficas para actividades que responden a las condiciones impuestas por la guerra colombiana y las cuales han significado un conflicto armado de larga duración.

Un repaso rápido por la segunda mitad del siglo XX colombiano, que marcó de manera definitiva las condiciones actuales de las identidades territoriales, muestra que uno de los actores, habitantes del Urabá en los años 50, fueron algunos grupos de guerrilleros liberales, los cuales estaban compuestos por arrendatarios y aparceros que habían sido expulsados por la expansión del latifundio en Córdoba, hito que remarca la manera en la que el problema de la tierra está en el origen de la historia del conflicto armado colombiano y, precisamente, del desarrollo de Urabá. Estas organizaciones armadas fueron creadas para defenderse de la policía conservadora (García y Aramburo, p. 300), lo que explica una suerte de origen del constante proceso de acción-reacción y de disputa de la soberanía en este territorio.

Esta pugna abonó el terreno para que se estableciera un sistema de “lealtades” con respecto al actor armado dominante; así, en la región: “Con una ausencia histórica del Estado en algunas zonas, las regulaciones fueron forjadas paradójicamente por los grupos armados irregulares, que determinaron una territorialización marcada por la lógica militar, que en algunos casos subordinó y en otros fue subordinada, por las lógicas políticas y económicas” (Observatorio del programa Presidencial de DDHH y DIH, 2006, p.3).

Ahora bien, la década del 60 y el nacimiento de las guerrillas de izquierda en el país, también involucraron al Urabá antioqueño. En estos años los grupos guerrilleros de las FARC-EP y del EPL se establecieron en la región; los primeros al sur y los últimos al norte. El apoyo a la “causa revolucionaria” no era extraño, muchos de quienes se enfilaron en estas guerrillas de extrema izquierda provenían o descendían de las lealtades forjadas por las guerrillas liberales.

Las disputas por el dominio de la tierra, que el Estado fue incapaz de dirimir, y la oposición a la implantación del capital y sus instrumentos de dominación a partir del crecimiento de la agroindustria bananera, fueron móviles de la guerra librada en Urabá.

Es posible, entonces, hablar de algunas etapas del conflicto en concordancia con la propuesta de Clara García y Clara Aramburo (2011, pp. 321-323). Un primer lapso, que se inscribe en la década de 1980, deja claro que la lucha entre las guerrillas genera una distribución del territorio del Urabá antioqueño, de la siguiente forma: el EPL se adueña del norte de Urabá (Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y norte de Turbo) y en los límites con Córdoba (Los Córdoba, Canalete, Tierralta y Valencia), mientras las FARC-EP se encargan de la parte limítrofe del Chocó (Acandí, Riosucio y Unguía) y el sur del Urabá antioqueño (sur de Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte). De otro lado, el eje bananero, en el centro de Urabá, permitía la confluencia de ambas guerrillas y generaba la distinción según la adscripción de los trabajadores a uno u otro sindicato de la influencia de los grupos insurgentes: así pues Sintrabanano asociado con las FARC-EP y Sintagro con el EPL (García y Aramburo, 2011, p. 317).

Este primer momento, atravesado, como ya se dijo, por la división territorial bélica y la lucha intraguerrillera, tiene sus antecedentes en la ruptura interna que sufre el Partido Comunista Colombiano (PCC), dada la división del comunismo internacional entre la línea pro-china y la pro-soviética, fisura que contraponía la prevalencia de la lucha armada o de la lucha política como vía para la revolución. Aquella tensión derivó en la institucionalización del Partido Comunista-Marxista Leninista (PC-ML) y el posterior surgimiento del Ejército Popular de Liberación (EPL) como su brazo armado (Identidades, p. 99). Ocurre, en medio de estas tensiones, que “Bernardo Gutiérrez, comandante del V Frente [de las FARC-EP] deserta junto con varios de sus hombres y armas y se integra al EPL, arrastrando consigo las redes y circuitos propios de la clandestinidad que permitirían al EPL ampliar su margen de acción de Córdoba al Urabá” (Espinosa, 2012, p.226). El resultado de esto puede suponerse, una guerra matizada por la identidad ideológica, como ya se explicó, en razón a la actuación bajo la lógica de las lealtades.

Emerge, entonces, una ruptura que supera las diferencias metodológicas en el accionar guerrillero y ubica en el escenario de la confrontación a los sindicatos de trabajadores de las agroindustrias de la región. Si bien se suma al proyecto insurgente los asuntos concernientes a los movimientos sindicales, a juicio de Clara García y Clara Aramburo:

Las guerrillas Farc y EPL le imprimieron tanta fuerza a la lucha sindical porque buscaban su propio beneficio: tener a su favor a la fuerza laboral organizada, mientras la organización sindical beneficiaba a los trabajadores al consolidar la institucionalidad laboral legal, que cambió los términos de relación obrero-patronal y debilitó los intereses de los empresarios en función de los de sus empleados (2011, p.294).

Así pues, la década del 80 imprimió a Urabá un sello que particularizó el conflicto armado en esta zona. Los asesinatos de trabajadores de la agroindustria bananera y sindicalistas, en otras palabras, las muertes políticas, ocurrieron de manera especial y constante, en el resto del país este fenómeno no era ajeno, pero en esta región fue protagonista. En ese sentido, Aparicio (2009) en su relato y basado en un informe de la Comisión Andina de Juristas para 1994, señala que a principios de los 90 se contó con una estadística de 41,42, de este tipo de asesinatos, por cada 100.000 habitantes (p.104).

Para las guerrillas del EPL y las FARC-EP, el tránsito de las reivindicaciones rurales a las exigencias de la vida urbana significó apropiarse de nuevas identificaciones “revolucionarias”, en la lucha, especialmente, con los empresarios bananeros y las dinámicas del capital que estos imprimían en la región (García y Aramburo, 2011, p. 302). Es justo señalar que ese cambio de paradigma se lo impuso el EPL al accionar guerrillero de la zona, pues fueron ellos quienes potenciaron el trabajo de masas y exigieron, indirectamente, que los demás actores se redefinieran tal como ellos lo habían hecho (Espinosa, 2012, p.297).

El viraje a la siguiente etapa del conflicto lo marcó la aparición de los grupos paramilitares al finalizar la década del 80; emergencia que cambia la causa y los enfrentamientos de los actores armados pero que no acaba con la confrontación entre las FARC-EP y el EPL. La voz de Mario Agudelo, ex miembro del Comité Central del PCC-ML, ex diputado de la Asamblea de Antioquia, ex alcalde de Apartadó y expresidente de Esperanza, Paz y Libertad es útil para la narración de esta historia.

Los grupos paramilitares que llegaron inicialmente, en marzo de 1988, fueron los de Puerto Boyacá. Ejecutaron las masacres de Honduras, La Negra y Punta Coquitos, asesinaron a Argemiro Correa, el líder sindical más importante de la región y a un integrante de la comisión de garantías electorales, creada con motivo de la primera elección popular de alcaldes. Esos grupos tuvieron como característica la ejecución de acciones en las cuales su intención inmediata no era el dominio territorial; estas se centraron en la agresión contra la población y la dirigencia política y sindical influenciada por la izquierda, con el objetivo de restarle capacidad de movilización popular y afectar sus estructuras políticas, sindicales y sociales [...] A los paramilitares de Puerto Boyacá les quedó muy difícil continuar con su actividad

militar, porque primero, encontraron un entorno político hostil; segundo, por la gran capacidad de respuesta social que había en la zona; y tercero, porque en la zona bananera que era realmente la zona donde había un mayor dominio de parte nuestra y del Partido Comunista y de las FARC, había un fuerte trabajo de milicias [...] Finalmente, las autodefensas de Puerto Boyacá se retiraron y, posteriormente, a mediados de 1989 aparecieron en la escena regional las de Fidel Castaño, provenientes de Córdoba (Agudelo, 2005, p. 131).

De esta forma, al iniciar la década de 1990, las organizaciones de autodefensa se unifican con el nombre de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (ACCU). Si bien no el nacimiento, en parte, desde Urabá, sí se gestó el fortalecimiento del proyecto paramilitar que dominó al país y perpetró las máximas expresiones de violencia. Su límite con el departamento chocoano abría posibilidades para el dominio territorial; es importante resaltar que “durante la expansión de esta estructura armada, los municipios que presentaron las tasas de homicidio más altas fueron Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, donde la presión que ejercieron las ACCU les permitió consolidar su zona de influencia hasta el Urabá chocoano” (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2006, p. 10).

Pero resulta impropio continuar con la descripción del fortalecimiento paramilitar en la región, sin antes describir la situación nacional de las guerrillas para el inicio de esta década. Exactamente en 1987, y sin diluir las fronteras territoriales que históricamente marcaron la división entre el EPL y las FARC-EP en Urabá, aparece un proyecto unificador de los ideales políticos de las guerrillas y sobre todo, un proyecto estratégico, en cuanto buscaba avanzar a mediano plazo en la creación de un gran ejército revolucionario; se materializa así la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

Pese al proyecto en curso, al iniciar la década de 1991, el EPL renuncia a la lucha armada, fracturando aún más la relación con las FARC-EP; el 1 de marzo de ese mismo año, entonces, el EPL se desmoviliza en el corregimiento Pueblo Nuevo de Necoclí, a pesar de esta acción decisiva para la finalización del conflicto, es en este momento donde se matiza nuevamente la violencia de la región y la confrontación entre los actores, pues, a la postre del proceso de desmovilización, una minoría decidió seguir la trayectoria dentro de la izquierda revolucionaria bajo el liderazgo de Francisco Caraballo, situación que desata una serie de escisiones descritas por Suárez (2007): primero, los altos mandos militares se convirtieron en dirigentes políticos del movimiento Esperanza, Paz y Libertad; segundo, la disidencia del EPL aparece en Necoclí, porque era allí donde aquellos comandantes, quienes retornaban a la lucha armada, ejercían el mando, además porque este municipio cargaba con un fuerte componente simbólico al haberse producido allí la desmovilización; tercero, una vez es reconquistado el norte, por la disidencia del EPL, comienza la incursión hacia el eje bananero, es preciso apuntar que la zona de operación de la guerrilla reactivada estuvo delimitada por las fronteras territoriales entre la antigua guerrilla del EPL y las FARC; y cuarto, en marzo de 1992 aparecen los Comandos Populares, grupo armado cuyo objetivo fue neutralizar la violencia generada por la disidencia del EPL (p.130).

Las diferencias se agudizaron tras el fracaso, en junio de 1992, de los diálogos que el presidente César Gaviria (1990-1994) adelantó con la CGSM, pues este asunto enardeció el sentimiento de hostilidad de la izquierda revolucionaria y causó, por citar un ejemplo, la ocurrencia, entre agosto y septiembre de seis de las siete masacres acaecidas tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las guerrillas, “siendo la disidencia del EPL sus principales perpetradores y los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo sus principales escenarios” (Suárez, 2007, p.134).

El inicio de la década del 90 significó una confrontación entre la guerrilla y aquellos desmovilizados que veían en la opción democrática una verdadera alternativa política. Basta citar la masacre de La Chinita, el 23 de enero de 1994, en la que las FARC-EP asesinaron a 35 obreros y habitantes de este barrio de invasión de Apartadó². La cifra que presenta el Observatorio de DH y DIH de la Vicepresidencia, ilustra aquella confrontación que involucró tanto a la izquierda representada en organizaciones políticas como a la izquierda armada: entre 1991 y 2003, fueron 632 asesinatos a sindicalistas, de los cuales el 66% se le atribuyen a las FARC-EP (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2006, p. 9). Pero la violencia no tuvo en Urabá un carácter unilateral. Este mismo informe señala que no se puede omitir la alianza entre las autodefensas y los “Comandos Populares”

... los cuales fueron absorbidos por los grupos de autodefensa emergentes. Entre 1992 y 1996, éstos empezaron a atacar las bases de la UP, el Partido Comunista y a todos los que consideraban apoyos de las Farc. En el año 1995, se dio un repunte de sus acciones, la mayoría de las cuales fueron dirigidas contra las organizaciones sociales, por medio de homicidios y masacres (p. 11).

Esta situación le abrió paso al Estado con todo su aparato militar. Se instaló entonces la XVII Brigada del Ejército Nacional, lo que duplicó la presencia de soldados en la región y además agravó el conflicto en tanto, como bien lo señala Suárez, la militarización de los noventa ya no sólo estaba agenciada por las élites políticas y económicas de la región, sino también por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad (2007, p.142).

Ahora bien, paralelo a este enfrentamiento entre la izquierda armada y no armada, a la lucha entre el Estado y las guerrillas, emerge el desbordado accionar contrainsurgente de los paramilitares y con él la fractura del tejido social de la región. Basta hacer una revisión a algunas de los eventos violentos que el paramilitarismo escribió en la historia de Urabá en los últimos años del siglo XX y principios del XIX para confirmar la escalada ocurrida en la región, la cual representan una tercera etapa del conflicto:

1. En enero de 1995, el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño —que venía avanzando por el norte de Urabá en la frontera con Córdoba—, anunció en un

² Un grupo de guerrilleros del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP y disidentes del EPL, entraron a La Chinita, barrio de invasión del municipio de Apartadó, donde se habían ubicado 5.000 familias, constituyéndola como la invasión urbana más grande en la historia de América Latina (Suárez, 2007, p.135). Según la base de datos *Rutas del conflicto*, realizada por el portal periodístico Vedadabierta.com, los guerrilleros dispararon indiscriminadamente, acribillando a 35 personas, muchos de los cuales eran simpatizantes de ‘Esperanza, Paz y Libertad’.

comunicado su entrada al eje bananero, la cual cumplió con una masacre el 12 de agosto de este año, en la discoteca de Aracatazo, un barrio de la Unión Patriótica -UP- en Chigorodó; las Farc contestaron al ataque con una masacre en la finca de los Cunas, el 29 del mismo mes.

2. [...] En 1995, también se registró en el municipio de Necoclí, la muerte de 130 personas, otras 122 desaparecidas y 2.500 desplazados.
3. [...] En el año 1997, las ACCU iniciaron una ofensiva con el fin de tomar el control del Nudo de Paramillo, lo que se tradujo en asesinatos, masacres y desplazamientos, donde tanto las Farc como las autodefensas, actuaron por medio de acciones que se dirigieron contra la población, mientras que los enfrentamientos directos fueron escasos (p.12).

La siguiente etapa del conflicto y la última de los años de mayor algidez del mismo, registrado por la mayor parte de la literatura sobre el tema, está marcada por la desmovilización de los bloques paramilitares. Es justo precisar que en toda la región del Urabá, que incluye a los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, operaban los bloques Bananero, Héroes de Tolová y Elmer Cárdenas, quienes se desmovilizaron, respectivamente, en los años 2004, 2005 y 2006.

Clara García y Clara Aramburo evidencian como la desmovilización no significó la paz de la región, al contrario y paradójicamente representó un recrudecimiento de la violencia. Aunque en el primer año en el que aparentemente las estructuras paramilitares habían sido desarticuladas hubo una reducción de los eventos armados, pero prontamente, el 2007 llegaría con un ascenso de estos hechos violentos. La investigadora explica:

Tal incremento del conflicto es una tendencia mesorregional en las fronteras de Urabá con el occidente de Antioquia y con Córdoba, cuyos focos son Turbo, Dabeiba y Tierralta, donde confluyen actores armados nuevos o alistados bajo otras identidades: desmovilizados reactivados, nuevos poderes emergentes, bandas criminales (algunas vinculadas con el narcotráfico) y un creciente avance de la guerrilla en el Centro y el Sur de la región. Esta nueva dinámica ha afectado a todos los territorios, pero principalmente a los habitados por las minorías étnicas, a las zonas campesinas del Norte y a las situadas hacia la región occidental del departamento (p. 323).

En la actualidad es claro que aunque las autodefensas pasaron por un proceso de desmovilización, místico y mediático, y de que las FARC-EP disminuyeron allí su accionar, la región sigue siendo un refugio de expresiones propias de un conflicto inacabado. El portal de información periodística VerdadAbierta.com, reporta en su artículo *Veinte años de una guerra sin límites en Urabá* una serie de hechos de los cuales es posible concluir que las presiones a los pobladores de Urabá y las diferentes confrontaciones entre grupos armados, incluyendo al Ejército Nacional, persisten. Así pues registra información del sindicato Sintrainago el cual denunció las amenazas contra su principal líder, en 2011, por presuntos miembros de la guerrilla; por otra parte, resalta la

ofensiva del Gobierno por “la cacería” -como lo califica el portal-, contra integrantes del Clan Úsuga, banda criminal, dedicada al tráfico de drogas de Suramérica a Centroamérica.

Una situación adicional reviste de complejidad la actualidad de la región y evita el cese total del conflicto. Se trata del tema de la restitución de tierras, un proceso que se ha adelantado en cabeza de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que registró al 2015, que en la región de Urabá se han solicitado 1.390 hectáreas para restituir y 1.342 ya fueron devueltas o compensadas. Un difícil proceso por el que han sido amenazados y asesinados líderes reclamantes de tierras, como el asesinato, el 9 de abril de 2014, en el municipio de Turbo, de Adán Bernardo Quinto. Según la Fundación Forjando Futuros, este caso, sumó entre el 2008 y el 2014 un total de 67 reclamantes de tierras asesinados en Colombia, de los cuales 19 han sido de la región del Urabá, aquella esquina estratégica y biodiversa que puede contarnos la historia de las soberanías en disputa dispuestas sobre el territorio colombiano, claramente, Urabá también puede narrar la resistencia de sus habitantes, de su movilización y organización; en este contexto quedan expresas algunas partes del engranaje que significa la historia de la presencia del conflicto armado en las últimas décadas del siglo XX y el inicio del actual siglo, tan complejo es el cometido que habrá detalles fugados pero seguro responden, igualmente, a la violenta lógica de los intereses económicos y políticos en un escenario vulnerable a la fuerza de la guerra y del poder.

2.5 Situación de los medios de comunicación

Al revisar la literatura generada sobre el diagnóstico de medios de comunicación en Urabá, se encuentra una gran escasez de producción, casi nula y limitada al esfuerzo desarrollado por la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Sergio Fajardo Valderrama, proyecto titulado “Red Antioquia”, que reunió desde el 2013 a los actores vinculados a procesos de comunicación en las regiones del departamento, les brindó capacitación y construyó un diagnóstico de medios que se configura como el precedente en materia de estos estudios, para el departamento.

Sin embargo, del proyecto “Hacemos Memoria, estrategia para la formación de periodistas en Memoria histórica”, de la Deutsche Welle Akademie en asocio con la Universidad de Antioquia, se deriva un nuevo escaneo de medios en las regiones priorizadas por el proyecto, entre ellas se encuentra Urabá.

De aquella información, es posible extraer un panorama de la situación de los medios de comunicación, en esta región que, como se ha descrito, ha estado atravesada por problemáticas de gran complejidad. Así mismo, los esfuerzos comunicativos presentan características que pueden explicarse a partir del contexto económico, organizativo y armado de la región.

Se tiene así un universo de 57 medios de comunicación identificados en la región. La mayor parte de ellos ubicados en el Eje Bananero, es decir en la zona centro de la

subregión, donde es posible hablar de una mayor concentración de habitantes y de actividades productivas.

De los medios estudiados por este diagnóstico, 25 en total, se puede concluir que hay una prevalencia de la radio como formato para la generación de contenidos informativos, las emisoras representan un 60% de los medios en Urabá. Contrariamente, no se reporta ningún medio digital, lo que permite suponer unas características de la forma de informarse de sus habitantes muy relacionadas con lo tradicional del oficio periodístico.

A diferencia de otras regiones del departamento, como el caso de Oriente y de Medellín, en Urabá pocos son los medios que pertenecen organizaciones sociales, estos apenas significan el 20%, mientras que los medios que se sostienen por medio de recursos privados representan el 64% del total estudiado. Allí, también hay una presencia de los pertenecientes al Estado, como es el caso de los medios de las Fuerzas Armadas, y otros que reciben dineros públicos como la emisora de la Universidad de Antioquia, institución de educación superior y carácter público del departamento.

Lo anterior permite deducir que la construcción de la información, y la recepción de la misma, de manera masiva, ha estado lejos de los esfuerzos realizados por las organizaciones o al menos, han representado una forma incipiente de apropiación de la información como parte de procesos de organización comunitaria. Incluso, parece que es la información más controlada desde el orden nacional la que genera mayor adscripción por parte de los usuarios, constituida por las emisoras de RCN y Caracol, ambas cadenas nacionales con sede en Apartadó.

Algunos de las personas consultadas por el proyecto “Hacemos Memoria, estrategia para la formación de periodistas en Memoria histórica”, señalan que el poco capital es el impedimento para la producción y la buena gestión de los medios en la región, razón por la que los medios impresos no salen con frecuencia y por demás solo representan el 32%, la mitad de los radiales.

Esto es también un argumento para que el personal en el 46% de los medios consultados no supere las 5 personas y, de esa forma, muchos de los periodistas y los generadores de información sean colaboradores en vez de personas que ostentan estabilidad laboral.

Ahora bien, como este documento intentó explicarlo, la región de Urabá ha sido quizá una de las más vulnerables a los actos de la violencia que ha vivido Colombia, es por eso que las temáticas relacionadas con el conflicto armado no se escapan de la agenda mediática. El 68% de los medios dicen cubrir o haber cubierto el tema. Sin embargo, también se permite leer una suerte de temor por ciertos temas imbricados con esta historia armada en la región, como es el caso del narcotráfico.

La memoria y los diferentes conflictos merecen un proceso reflexivo en la región, los medios de comunicación son escenarios propicios para ello, pero deberán estar respaldados no sólo por un proceso formativo adecuado sino también por las formas de tramitar los

conflictos de maneras menos coercitivas y violentas, ellas incluyen la misma posibilidad de informar, ahí está el futuro de las posibilidades y potencialidades del periodismo en razón de la memoria.

2.6 Bibliografía

Acnur (2004). Algunos indicadores sobre la situación de los Derechos Humanos en la región del Urabá antioqueño.

Aparicio, J. R. (2009). La mejor esquina de Suramérica: aproximaciones etnográficas a la protección de la vida en Urabá. *Antípoda*, No. 8, p. 87-115.

Espinosa, N. (2012). Impactos del paramilitarismo en la región Urabá/Chocó 1998-2006. Claves para la lectura de las afectaciones colectivas. *AGO.USB*, Medellín, No. 12, p. 289-327.

García de la Torre, C. I., Aramburo Siegert, C. I. (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia: Oriente y Urabá antioqueños 1990- 2008. Colombia: Colección territorio, poder y conflicto.

García, C. I. (1997). Urabá: políticas de paz y dinámicas de guerra. *Estudios Políticos*, n. 10, p. 138-149.

García de Botero, Clara Inés (2004). Resistencias. Análisis Comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y el Oriente antioqueño. *Nómadas*, Bogotá, n. 20, pp. 102-110.

Instituto Popular de Capacitación (2012). Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006). Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño.

Ramírez Tobón, W. (1993). Estado y crisis regional: el caso de Urabá. *Análisis Político*, Bogotá, n.20, p. 23-38.

Suárez, A. F. (2007). Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá 1991-2001. Medellín: La Carreta Editores.

Uribe de Hincapié, M. T. (2001). Nación, ciudadano y soberano. Corporación Región.

Verdad Abierta (2015). Veinte años de una guerra sin límites en Urabá. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/desde-regiones/5996-veinte-anos-de-una-guerra-sin-limites-en-uraba>

CONTEXTO HISTÓRICO ORIENTE ANTIOQUEÑO

3.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos

El Oriente es una de las nueve subregiones que se dibujan en el mapa antioqueño, ubicada, realmente, al sur oriente del departamento. Está comprendida por 23 municipios cuyo territorio total suma 7.021 km² y significa, aproximadamente, el 11% del área de Antioquia. Sus zonas limítrofes son: al occidente el Valle de Aburrá y al oriente la llanura aluvial del río Magdalena; en el norte con la divisoria de aguas de los ríos Nus y Nare, mientras que al sur lo hace con el departamento de Caldas, a lo largo de los ríos Arma y Samaná. Según el censo oficial realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005, el Oriente antioqueño tiene alrededor de 522.819 habitantes de los cuales el 55% se ubica en las zonas urbanas y el 45% en el área rural.

En lo ancho y largo de su territorio es posible encontrar la diversidad paisajística y climática que resume parte fundamental de Antioquia. Esta región, a su vez, está dividida en cuatro zonas que describen muy bien su heterogeneidad climática y, por consiguiente, la complejidad de sus aspectos sociodemográficos. Esas zonas y sus respectivos municipios son:

Zona de Páramo: Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón. Es conocida como “el Oriente lejano” y permite la comunicación con el Magdalena y el Cauca medio, característica que la ha convertido en un corredor estratégico para el accionar de los diferentes grupos armados. Su riqueza se centra en los productos derivados de la agricultura y de sus posibilidades ecológicas.

Zona de Embalses: Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Granada, San Carlos. Configura el centro de producción hidroeléctrica del departamento y abastece la tercera parte de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia

Zona de Bosques: Cocorná, San Francisco, San Luis. Esta triada no sólo es importante en el departamento por los recursos que genera a partir del patrimonio natural sino por constituirse en un eje vial estratégico del país, dado que está atravesada por la autopista Medellín-Bogotá.

Zona del Altiplano: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente. También conocido como el “oriente cercano” pues es el vecino directo del Valle de Aburrá. Esta zona ha albergado la mayor parte de la industria de la región y se ha convertido en la zona de recreo más próxima a Medellín, la capital del departamento antioqueño (IPC, 2006, pp. 48 y 49).

Esta división zonal ha permitido a su vez la identificación y agrupación de acuerdo a las afinidades entre los municipios y ha convertido las diferencias en sellos característicos que permiten explicar y analizar el contexto sociopolítico con mayor detalle. Es por eso que en clave de la propuesta metodológica que hacen Clara García y Clara Aramburo es justo distinguir entre los procesos de crecimiento poblacional del “Oriente cercano” y los del “Oriente lejano”.

Volver al siglo XIX permite encontrar dos hitos fundamentales en el proceso de configuración de la región: el primero de ellos es la pugna entre Medellín y Rionegro por ser la capital del Estado y por tanto concentrar el poder de Antioquia; el segundo es la proximidad de Rionegro con el sur y, en ese sentido, su papel esencial en la colonización antioqueña hacia otras zonas del país. La agricultura campesina se convirtió en aquellos años en la particularidad de la región, que aunque perdió protagonismo ante otras emergencias del siguiente siglo, aún hoy, según el Censo Agropecuario 2005-2007, queda claro que de esta fracción de Antioquia provienen alrededor del 60% de los bienes de consumo interno del departamento (García y Aramburo, 2011, p. 45).

Innegable es la pérdida de protagonismo del Oriente desde finales del siglo XIX, la mitad del siglo XX llega con razones para devolverle significación. A partir de los años 50 los municipios de Marinilla y Rionegro se impusieron como los grandes centros de poder económico y político del Oriente cercano; de alguna manera, lograron consolidar dinámicas de crecimiento que supusieron un importante aumento demográfico. Allí las élites locales se acomodaron bajo la sombra de la Iglesia católica y el Partido Conservador y se convirtieron en el motor del desarrollo del comercio, la industria y la agricultura, razón por la cual el proceso de urbanización tuvo mayor planificación si se compara con otras regiones del departamento. Por su parte el Oriente lejano tuvo procesos de colonización y poblamiento más dispersos, albergó a los indígenas de resguardos como el de El Peñol y el de San Antonio de Pereira; además, recibió de manera, si se quiere, desordenada, a campesinos que se abrieron paso con machete a través del entonces inaccesible bosque. (García y Aramburo, 2011, p.5).

El crecimiento poblacional del Oriente antioqueño se dio como resultado de la fórmula que sumó el aumento poblacional con las oportunidades económicas que aparecieron en la región. Para mediados del Siglo XIX, además de Medellín y el sur del Valle de Aburrá, los únicos municipios que superaban los 40 habitantes por km² eran Guarne y Rionegro, pero el resto del territorio del Oriente, para principios del siglo XX, aumentó el nivel demográfico, llegando a un promedio de 30 habitantes por km², siendo únicamente superado por el Valle de Aburrá y la región del Suroeste (Corporación Jurídica Libertad, 2010, pp. 15 y 16).

En la de mitad del siglo XX la población creció inicialmente por un proceso de industrialización cuya máxima expresión se vivió en la zona del Altiplano³; es preciso remarcar que una de las claras razones de que sea allí donde se potencie este proceso, es la cercanía con el Valle de Aburrá, epicentro económico y político de Antioquia. La literatura sobre el tema coincide en que este crecimiento trajo consigo un desborde de las capacidades para satisfacer las necesidades básicas de la región, a lo que se le anexó el fenómeno de la compra de tierras para el esparcimiento por parte de las familias de la clase alta, que no sólo cambió la vocación de la tierra sino que elevó los precios de la misma.

Ahora, a partir de 1970 la población que conforma lo que hoy se conoce como la zona de Embalses vio cómo su territorio se convertía en una fuente energética fundamental para el país y, a partir de este hito de aparente desarrollo, construyó la identidad que en adelante marcaría el accionar social, político e incluso militar de sus habitantes. La crisis energética de aquel momento en Colombia hizo que la mirada se posara sobre la potencialidad del Oriente, en especial, en función del aprovechamiento sobre la riqueza hídrica de las cuencas del río Nare; así, se abre espacio el complejo hidroeléctrico que en aquella época representaba la producción del 60% de la energía eléctrica del país y, de paso, reconfiguró la geografía de la región (García y Aramburo, 2011, p.47).

Pero el modelo energético no fue el único que impactó la región con promesas de progreso y por consiguiente con la atracción de nuevos pobladores. Otros megaproyectos irrumpieron en esta zona y redefinieron sus dinámicas sociodemográficas, como es el caso de la autopista Medellín-Bogotá, que aunque permitió la mejora de la comunicación con municipios como Granada, San Luis y Cocorná, afectó de manera tajante y negativa las lógicas de este territorio, por ejemplo separando a Cocorná de su corregimiento San Francisco, aislándolo de la cabecera municipal; al tiempo relegó a los municipios de Sonsón y Nariño, que hacían parte de la antigua vía que comunicaba a Medellín con el centro del país.

Con estos dos megaproyectos el carácter disperso del llamado Oriente lejano se transforma, la región se proyecta unificada al servicio de intereses geoeconómicos de las élites nacionales y departamentales (PNUD, 2010, p.7) y, como bien lo advierte la literatura casi de manera uniforme, ese modelo de desarrollo ignora las dinámicas territoriales y la economía campesina agudizando lo que García y Aramburo (2011) resaltan en su investigación y es que “los efectos reales del ‘desarrollo’ se concentran en una pequeña porción de sus municipios y ocasionan así la fractura del Oriente en dos escenarios” (p. 49), los ya caracterizados Oriente cercano y Oriente lejano. Con respecto al primero de ellos y esta incursión de megaproyectos que irrumpieron en la región, es fundamental señalar que el Oriente cercano no estuvo del todo abstraído de esta lógica, pues con la construcción del aeropuerto José María Córdova (1985) también esta fracción del Oriente y el Oriente mismo sufrieron un viraje.

³ Adicionalmente la Ley 200 de 1936 consagró la expansión de las zonas de frontera agraria incentivando la colonización campesina. “Estos movimientos demográficos hacia las zonas apartadas explican el aumento demográfico en subregiones como Páramos, Bosques y Embalses, cuya ubicación distante de los centros urbanos del país había excluido históricamente” (Corporación Jurídica Libertad, 2010, p. 16)

3.2 Vocación productiva y uso del suelo

De las montañas, los bosques, el complejo paramuno y el altiplano del Oriente antioqueño no puede desatarse, naturalmente, otra vocación que no responda a las lógicas de la ruralidad, en este caso a una doble relación entre autoconsumo y comercialización de los productos en los márgenes de los límites y posibilidades de la agricultura campesina. García y Aramburo (2011) exponen que pudieron constatar en su trabajo con los pobladores de la región su insistencia en el hecho de representar la despensa agrícola de Antioquia, entre otras cosas por el monopolio de productos como el tomate chonto, el repollo, la habichuela, la zanahoria, el pepino, el chócolo, la guayaba, la mora, la remolacha y el pimentón (p. 45)

Sin embargo, una suerte de invasión transformó las prioridades del suelo del oriente y por tanto la vocación económica en la conciencia de sus pobladores. Como ya se señaló, los cambios en las actividades económicas que llegaron en la segunda parte del siglo XX se corresponden con disposiciones de orden nacional que ignoraron las particularidades de la región y se superpusieron a su autonomía; en medio de esta realidad, es posible determinar dos procesos que impulsaron esa transformación, ocurridos a finales del siglo anterior: el primero es la reubicación de la zona industrial proveniente del Valle de Aburrá en la zona del Altiplano y el segundo es la construcción de los megaproyectos referenciados en el apartado anterior, el complejo hidroeléctrico, la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdova. A estos fenómenos, ubicados por los estudiosos del Oriente como el origen de aquella transformación económica y productiva, se le suma un proceso más que emergió también en el final del siglo XX pero que continúa afianzándose en la actualidad: la exploración y extracción minera en los municipios del oriente antioqueño.

La reubicación de la zona industrial en el Altiplano se constituyó en una expansión geográfica del poder de los actores económicos que emanan de la capital departamental; esto supone una concentración de la producción en las élites ya consolidadas en el Valle de Aburrá. Es decir, no hay una real emergencia del crecimiento de los pobladores con el asentamiento industrial en el Oriente, especialmente en el llamado Oriente cercano. Bien lo profundizan García y Aramburo (2011): “Lo que se teje es una cadena productiva que enlaza el área metropolitana con el oriente cercano y, por tanto, también la influencia de los poderosos grupos de interés que están detrás de la migración industrial” (p.48).

La década del 70 aparece con la implementación de un proyecto energético que vio en el Oriente antioqueño su más apropiada sede. Las afectaciones que trajo la construcción de las centrales hidroeléctricas son incalculables en cifras, pero lo cierto es que generaron una ruptura difícil de reparar en las dinámicas de esta subregión.

Para tratar de ilustrar lo que esto significó, basta con imaginar el cuadro de la época en el cual el municipio del Peñol vivió el traslado por completo de su casco urbano. En él se presentaron inundaciones en zonas rurales y también en el área urbana, obligando a sus habitantes a reacomodarse en El Nuevo Peñol con todo y los cambios que ello implicaba en sus actividades económicas y sociales.

De repente la pequeña localidad se vio invadida de maquinaria pesada y de numerosos foráneos. Se vivió la especulación en la compra y venta de tierras, paros de protesta, trabajo en masa para pobladores y emigración de otros, un giro en la economía local e incremento de la población (PNUD, 2010, p.6).

Las inundaciones provocaron el fin de la producción agrícola de buena parte del territorio en municipios como el Peñol y Guatapé; su población campesina migró hacia Medellín e incluso a otras zonas del país, pero quienes se quedaron y decidieron buscar posibilidades se enfrentaron a la competencia en desventaja con aquellas familias que llegaron en busca de empleo tras el boom de la industrialización (PNUD, 2010, pp. 6-7). Así pues, la ejecución de los proyectos hidroeléctricos no logra restituir las fuentes de empleo que destruye en su construcción, no produce un cambio positivo en las comunidades sino que afecta las condiciones materiales de su existencia (Corporación Jurídica Libertad, 2015, p.20).

Estos proyectos hidroeléctricos no tuvieron fin en ese período histórico, pues aún en la actualidad siguen construyéndose. Un estudio departamental sobre el “Potencial Hidroeléctrico de Antioquia” al año 2010, estima que el potencial del Oriente antioqueño es de 5.806,43 MW sumando el potencial hidroeléctrico sin Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con EMP, ubicando la región en el segundo lugar después del norte, lo que, claramente, se convierte en una presión frente a la posibilidad de aprovechamiento del patrimonio hídrico. En la siguiente gráfica es posible observar esa distribución del potencial y concluir tras ella que los ojos seguirán puestos sobre esta región para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

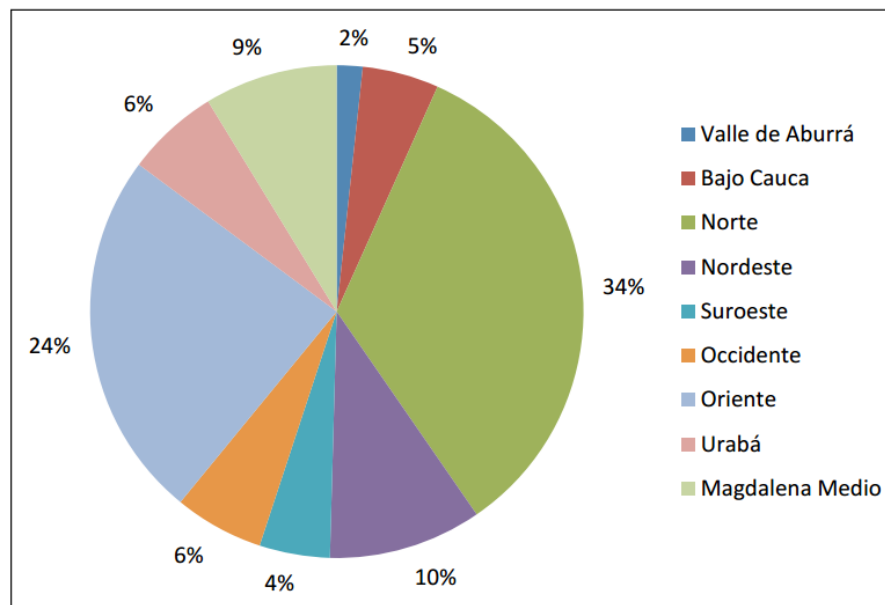


Gráfico 3
Distribución subregional del potencial hidroeléctrico de Antioquia en 2010
Fuente: Potencial hidroeléctrico de Antioquia

Para explicar el tercer proceso es justo referenciar el contexto internacional en el cual el modelo neoliberal potenció la demanda de materias primas de los países subdesarrollados, entre otras cosas implementando un modelo extractivista, basado en la explotación de

fuentes de energía y el establecimiento de proyectos mineros liderados por empresas extranjeras.

Colombia, por su gran riqueza natural y mineral, ha sido el blanco de esta estrategia y además ha establecido incentivos para provocar la atención de empresas transnacionales. Basta revisar el Código Nacional de Minas, en cuyo artículo 13 declara a la industria minera de utilidad pública e interés social y por tanto establece que “podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo” (Corporación Jurídica Libertad, 2015, pp. 5 y 6). Esto advierte una superposición de este objetivo sobre las disposiciones locales, lo que sigue perpetuando la brecha entre las decisiones nacionales y las particularidades de la región.

Es posible hablar, entonces, de que el interés por la minería en el Oriente antioqueño se corresponde con las políticas impulsadas en las dos últimas décadas del siglo XX y en el inicio del siglo XXI. La siguiente gráfica demuestra cómo la presencia de la multinacional Anglo Gold Ashanti es preponderante en el territorio de la subregión, con 26 licencias de exploración y explotación y un área de 18.557 hectáreas, dominando el 35% del territorio concesionado.

Extensión de las áreas otorgadas a empresas o personas con más de seis títulos mineros (en hectáreas)

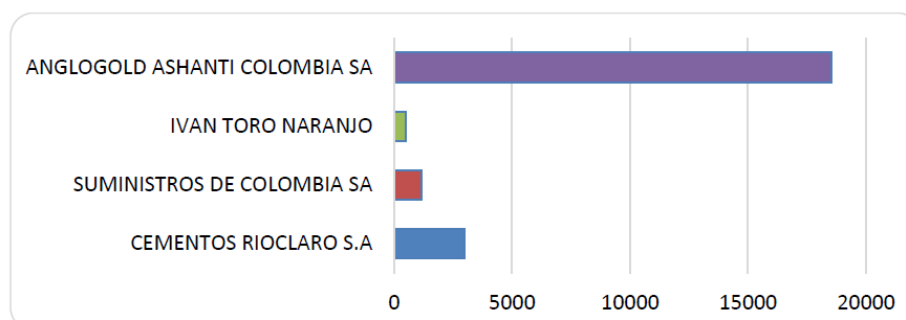


Gráfico 2

Fuente: Corporación Jurídica Libertad con datos de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia (2014)

3.3 Formas de participación y organización política

La presencia de los megaproyectos se encargó de darle forma a una nueva identificación de la región, que a su vez puso en disputa dos grandes fuerzas: la del Estado, con la defensa de sus políticas y estructuras, y la de la comunidad, provista de un discurso alternativo cuya reivindicación versaba sobre la autonomía de la región, la cual vieron afectada tras la imposición de un modelo de desarrollo “externo” que no les fue consultado.

El Estado desplegó de manera muy particular un poder que, tras la construcción de los proyectos ingenieriles, se afianzó en dos momentos. Durante la década del sesenta hubo una suerte de homogenización del pensamiento inducido por el poder estatal a las asambleas municipales de alcaldes, lo que permitió que las discusiones giraran en torno a los intereses del gobierno nacional derivados de la instalación de los proyectos y del proceso de industrialización de la zona del altiplano. La actitud del Estado en esta etapa fue entonces “[...] menos publicitada, más silenciosa, aparentemente muy burocrática, pero igualmente efectiva: la homogeneización de las conciencias y de los discursos que integran” (García, 1994, p. 24).

Posteriormente la Ley 56 de 1981 obliga a que el manejo de los recursos entregados por la Nación a la Región, derivados de la generación de energía eléctrica, no sea administrado por la empresa propietaria del proyecto sino por una entidad regional. Esta disposición, entre otras razones, respondía a una exigencia del Banco Mundial para el acceso a sus créditos.

Con la Ley 60 de 1983 se crea, entonces, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, cuyo principal objetivo es “promover y encauzar el desarrollo de la región comprendida bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de los recursos humanos, naturales y económicos con el fin de obtener el máximo nivel de vida de la población” (Cornare, 2015)

Ante esta política de Estado no se hizo esperar una fuerte movilización social. La década del 80 se convierte en testigo de la creación del Movimiento Cívico Regional, que le hace frente a las afectaciones de los megaproyectos, pero cuya organización se gesta realmente como respuesta a las tarifas de energía eléctrica que la población de los municipios donde se instalaron los proyectos y los aledaños a estos, se vieron obligados a pagar. De esta manera se da origen a aquella fuerza alternativa al poder hegemónico que tiene lugar en la región del oriente antioqueño; el Movimiento Cívico Regional, entonces:

[...] recoge algunas de las claves del discurso construido anteriormente por los movimientos cívicos locales y los coloca como antecedente y reiteración histórica de lo que ha significado el Estado para la región: las “decisiones tomadas desde afuera de la región”, “impuestas sin consulta” y con “enormes perjuicios”, y ahora las tarifas que se van a imponer son consideradas como injustas, por cuanto significan más costos, adicionales a los ya cuantiosos que han debido soportar para producir energía para los demás (García y Aramburo, 2011, p.53)

El Movimiento Cívico se arraiga a la región y por tanto desdibuja la idea, ya bien implantada en el país, de que la organización política sólo es posible en los márgenes de los partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal; de ahí que, como lo señala María Teresa Uribe, propició la “formación de una generación de líderes cívicos más independientes de

los partidos tradicionales, una valoración de las acciones colectivas, y una conciencia de región frente a los poderes centrales” (PNUD, 2010, p. 50)

La actitud contestataria que caracterizó al Movimiento Cívico no lo alejó de escenarios más formales de participación. Trascendiendo las protestas por la construcción de los embalses para la producción de energía eléctrica, tuvo candidatos a alcaldías y concejos en las elecciones de 1988; por ejemplo, el Movimiento de Acción Peñolita ganó las elecciones a la Alcaldía de El Peñol mientras movimientos cívicos lograron ocupar un lugar en los concejos de Guatapé y San Rafael. Sin embargo, es justo allí donde comienza el debilitamiento de la fuerza política que representaba, en especial tras el asesinato del más importante dirigente cívico, Ramón Emilio Arcila, el candidato más opcionado en ese momento a la Alcaldía de Marinilla (PNUD, 2010, p. 11).

La década del noventa estuvo atestada de manifestaciones sociales en forma de marchas, concentraciones, jornadas de silencio y otras maneras creativas de movilizarse; además, es preciso anotar que en ese momento las asambleas comunitarias locales se configuran como el respaldo por parte de la comunidad a los alcaldes para animar los acercamientos de paz con los actores armados⁴, de cuya capacidad organizativa se desprende la conformación de la Asamblea Provincial y el Consejo Provincial de Paz, escenarios de participación donde tuvieron cabida delegados de todos los municipios de la región, para la construcción de propuestas colectivas que permitieran tramitar la crisis humanitaria causada por el conflicto armado (García y Aramburo, 2011, p. 137). Según el informe publicado por el PNUD (2010), la proclamación de la Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño también se vio avivada por el descontento que generó en la población las amenazas provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular [en adelante FARC-EP] hacia los alcaldes municipales en el año 2000 (p. 20)

La Asamblea Provincial se convirtió en la Asamblea Constituyente de Antioquia, “un escenario departamental de representación y participación ciudadana en el marco de la cual se construyó un pacto social denominado la Agenda Pública de Paz y Desarrollo para el departamento, que impulsó la definición de metas de paz y la cohesión social en torno de ellas” (PNUD, p.20)⁵. De esta forma, a esta emergencia política se le da un carácter fundacional en la región, permitiendo un acercamiento entre la comunidad, la institucionalidad y los actores armados, especialmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional [en adelante ELN], quienes responden con una tregua de seis meses a la iniciativa de diálogo de los alcaldes tras su declaración de “sesiones permanentes por la humanización del conflicto” (García y Aramburo, 2011, p. 141).

⁴ Véase el apartado “Conflicto armado” para la comprensión de su surgimiento y escalamiento en la región.

⁵ En el 2000 las Asambleas Comunitarias adquieren la categoría de Constituyentes en el marco del artículo 3 de la Constitución Nacional del 91 que proclama que “la soberanía reside en el pueblo”.

En este contexto aparece una expresión de capacidad organizativa como respuesta social a los efectos de la guerra, que lleva por nombre “Laboratorio de paz” y no es nada distinto al fortalecimiento de la sociedad regional, incluso impulsada por el Estado, quien ve en la asociación de los diferentes actores de la región una posibilidad, como lo recalca García (p. 142), de institucionalizar el proceso social del Oriente. Su consolidación se debe a la intervención de la comunidad internacional, que a través de la cooperación internacional de la Unión Europea entienden al Oriente como el escenario pertinente para la implementación de sus políticas de paz y de defensa del discurso de los Derechos Humanos.

Para llegar a este punto la región atravesó un proceso de organización armada que no estuvo desvinculado de las acciones de la sociedad civil ni de sus movilizaciones, aunque esta idea tendrá un mayor despliegue en el siguiente apartado, que aborda la configuración y los efectos del Conflicto Armado en la región, es preciso apuntar cuáles fueron las principales consecuencias de la puesta en marcha del Laboratorio de Paz, que como ya se dijo, no está abstraído de las lógicas del orden nacional ni de las intenciones internacionales. En especial en el orden nacional, se ve atravesado por un contexto que:

... tiene dos componentes centrales: la política de Seguridad Democrática puesta en marcha por el presidente Uribe y la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares. El primero de los efectos es la disminución significativa de los índices de violencia (homicidios, masacres, secuestros, destrucción de pueblos) y con ello una razón para que las percepciones y los intereses colectivos tiendan a abandonar el conflicto armado y sus efectos cotidianos como el centro de su acción. El segundo efecto, concomitante con el anterior, es la desmovilización paramilitar (que empieza en Antioquia) y la aparición en escena de un nuevo actor social: las “víctimas” (García y Aramburo, 2011, p.145).

Sin embargo, el esfuerzo por trabajar colectivamente, superó la intención de hacerlo por el diálogo con los actores armados y continuó en función de una cultura de paz y la defensa de los Derechos Humanos, generando en el territorio una gran fuerza social, identificada con las características regionales.

Fueron varias las iniciativas que emergieron en el momento del escalamiento del conflicto y una vez la Ley de Justicia y Paz fue promulgada⁶. El análisis hecho por el PNUD de la conflictividad en el Oriente, apunta que estas iniciativas se vieron amenazadas por los actores armados; cita el ejemplo del programa “Sembradores de paz” ejecutado por la Diócesis de Sonsón y prohibido por el ELN, pero que continuó su trabajo pese a la intimidación (2010, p. 59).

⁶ Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz.

Un diagnóstico hecho por el Observatorio de Paz y Reconciliación⁷ identificó para el 2008 alrededor de 70 organizaciones sociales con carácter de movilización y manifestación colectiva. Entre ellas es posible destacar algunas como: la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas (Aprovaci), Asovida –cuya obra destacada ha sido el salón del Nunca Más en el municipio de Granada–⁸, la Asociación de Mujeres del Municipio de Marinilla (Asomma). Todas estas fueron iniciativas que se sostuvieron hasta la realización del II Laboratorio de Paz en el 2008 y que avivaron la participación de las víctimas del conflicto en escenarios políticos que permitían la resignificación de los hechos victimizantes y la conversión de su trabajo en pro de la reconstrucción del tejido social y la superación de los efectos que la guerra causó en la esfera de lo privado, para dotar su articulación de capacidad de movilización en la esfera pública.

3.4 Breve historia del conflicto armado

Repetidamente se ha dicho que la implantación de un modelo de desarrollo, materializado en la presencia de megaconstrucciones, no sólo irrumpe para transformar la configuración territorial de la subregión del Oriente antioqueño, sino que se convierte en el punto de partida de una suerte de caos social al que los pobladores hacen frente de diversas formas. Es por ello que si bien hay una división de apartados que busca explicar fenómenos como el uso del suelo o la formación política, ellos mismos construyen un entramado en el cual se identifica la subregión y del que las armas, con todo y sus pretensiones políticas, no están exentas, el conflicto armado se convierte entonces en otro configurador regional.

Es justo comenzar esta breve historia del conflicto armado en la subregión, con las palabras de María Teresa Uribe, quien ubica bien un punto de partida en este recuento.

A partir de la década de 1960 se asiste a una crisis de ese modelo de dominación (decimonónico de la antioqueñidad) manifiesto en el auge de movilización social [...], nuevas opciones de representación social y política de los intereses locales por corrientes cívicas que no obstante su perfil reformista, y sus márgenes de autonomía frente a la guerrilla y al izquierda, también fueron objeto de una labor de exterminio, circunstancia que abonó el terreno para la expansión de las guerrillas que en principio, se limitaron a hacer presencia en zonas rurales apartadas de los centros de poder del Oriente (Uribe de Hincapié, 2001, p. 51)

⁷ “El Observatorio de Paz y Reconciliación y la Unidad Móvil de Derechos Humanos se creó para hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos de la región, a través de investigaciones e informes periódicos sobre el tema. Iniciativa activa mientras se desarrolló el II Laboratorio de Paz, que concluyó en 2008. La Gobernación de Antioquia continuó el trabajo de las unidades móviles de derechos humanos al crear ocho de éstas para atender todas las regiones del Departamento. Se trata de equipos interdisciplinarios que trabajan por la vigencia plena de los derechos humanos y por la prevención de la violencia intrafamiliar” (PNUD, 2010 p. 22)

⁸ Proyecto para recuperar la memoria frente al conflicto armado en el municipio de Granada. Puede visitarse su página para ver más información <http://www.salondelnuncamas.org/>

Para fines de la década del 80 y principios de los 90 Colombia vivía un momento fundacional con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la proclamación de la Carta Constitucional de 1991, un hito sobre el que, entre otras cosas, apareció un contexto de represión de la movilización y la protesta; fue el momento del exterminio de la Unión Patriótica y la persecución a líderes que representaron opciones políticas alternativas a las hegemónicas en el siglo XX. La región no estuvo abstraída de esta realidad y por esta razón las voces disidentes se vieron disminuidas, además “la participación fue canalizada a través de vías institucionales minando su carácter contencioso o crítico, su apuesta por reivindicaciones sociales, y la posibilidad de convertirse en un poder civil alternativo” (IPC, 2006, p.53).

Ahora bien, es posible narrar la historia del conflicto armado en la subregión del Oriente antioqueño suponiendo que el asentamiento de los grupos armados, en esta región, no fue arbitrario; por el contrario, estuvo provisto de intereses económicos y territoriales que también se manifestaron en las reivindicaciones del movimiento social. Por supuesto, hubo una fracción extrema que instaló y escaló la guerra en la región.

La presencia del ELN, por ejemplo, se dio a través de los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe: ambos tienen un profundo arraigo regional, pues “se reconocen como “hijos de esta tierra”, en general de procedencia campesina, y personas que antaño habían sido líderes cívicos” (Geografías, p.66). La zona de influencia de este grupo armado fue la de “bosques”, cubriendo, especialmente, los municipios de San Luis y Cocorná, Posteriormente y en respuesta a una estrategia geoestratégica relacionada con la defensa de los recursos naturales, se extendió alrededor de las Hidroeléctricas, en la “zona de embalses”. Este grupo guerrillero, “finalizando la década de los noventa había consolidado su posición en el complejo de las torres energéticas, las cuales fueron objeto de continuos atentados que afectaban el buen funcionamiento del sector energético del país” (IPC, p.54).

Por su parte, el repliegue de las FARC-EP desde Urabá permite el asentamiento de esta guerrilla en el Oriente para fines de los años setenta⁹. De esta manera, el Frente 9 de esta guerrilla alcanza a cubrir buena parte de las zonas de embalses y bosques; para la década del 90, además, conquistaron buena parte de la región de páramos, frontera con el municipio de Caldas y uno de los bastiones del Frente 47.

En esta primera etapa del ascenso pronunciado del conflicto armado en el Oriente antioqueño, como lo catalogan García y Aramburo (2011), se presenta un auge en la confrontación, cuando los paramilitares entraron a disputarse la zona de bosques donde las FARC-EP tenían un poder consolidado; allí “la estrategia de confrontación utilizada por los grupos paramilitares puso a la población civil como objetivo de sus ataques por ser considerados colaboradores de la guerrilla” (IPC, 2006, p. 55).

⁹ “La llegada de las FARC al Oriente antioqueño es una continuidad de su presencia en el Urabá antioqueño. El Oriente, que era zona de retaguardia, donde sus miembros venían a replegarse, ya fuera en temporadas de descanso, a recibir atención médica o a hacer proselitismo, pasó a ser zona de confrontación bélica cuando la arremetida paramilitar en Urabá obligó al repliegue de la guerrilla” (PNUD, 2006, pp. 12).

Fue el momento en el que, además, la Gobernación de Antioquia impulsó las Convivir¹⁰, las cuales se instalaron principalmente en Sonsón y el Oriente cercano, “encabezadas por militares retirados “que se desempeñaban en tareas de protección a comerciantes y ganaderos [...]. Esos esquemas de seguridad fueron luego la inspiración y la base para la creación de los grupos paramilitares” (PNUD, 2010, pp. 14-15).

Los grupos paramilitares que han hecho presencia en el Oriente antioqueño han sido diversos: las Accu, de Carlos Castaño; las Autodefensas del Magdalena Medio, de Ramón Isaza; el Bloque Metro y los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Las Accu señalan su primera incursión en la región, hecha en 1998, con una masacre cometida en una vereda de La Ceja (Altiplano) y luego con otra del corregimiento El Jordán, perteneciente al municipio de San Carlos, subregión de Embalses. Existe además referencia sobre una incursión en el oriente hecha por integrantes del Bloque Central Bolívar durante la disputa interna que se presentó en las AUC entre los líderes paramilitares y el Bloque Metro (García y Aramburo, 2011, p.72).

Ya ubicadas las guerrillas en el territorio y con la potencia de la contrainsurgencia, llega una siguiente etapa que coincide con la llegada del nuevo siglo. Esta ocupó alrededor de cinco años de escalada del conflicto y en los años 2000 y 2004 los picos más altos frente a los eventos armados ocurridos.

Los ataques de las guerrillas efectivamente llegaron a su clímax en el 2000, año en el que, por ejemplo, el casco urbano del municipio de Granada quedó casi destruido en un ataque de las FARC- EP. Esta acción tuvo réplicas en San Carlos, Nariño, San Francisco y San Luis. Por su parte el ELN, en el mismo año, continuó con su estrategia de voladura de torres de energía que afectaron también a la población civil (IPC, 2006, p. 56).

La guerra contrainsurgente que libraron los paramilitares se volcó a la población civil; también en el año 2000, una masacre de 17 personas dejó en los pobladores de Granada un crudo recuerdo de su accionar. La fuerza de estos grupos, apunta el PNUD en su informe, hizo que la actividad subversiva empezara a declinar. Y es que el Oriente sufrió la presencia paramilitar a partir de asesinatos selectivos y masacres, especialmente en San Rafael, San Luis, San Carlos y una, también muy recordada, en vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral. Este mismo análisis señala que “su incursión y expansión se tradujo en graves violaciones de los derechos humanos. Solo en 2004, se presentaron cinco masacres en la región, en los municipios de Argelia, Cocorná, San Luis, Granada y San Carlos, y las organizaciones de víctimas estiman en 413 las víctimas directas de desaparición forzada (2010, p.15)

En los primeros años de la década del 2000, además de que las FARC-EP se convierten en la guerrilla preponderante y el ELN se ve casi diezmado, las Fuerzas Militares [en adelante FF.MM], por su parte, comienzan a hacer una fuerte presencia en la subregión, sumándose a la lucha contrainsurgente que ya los paramilitares habían comenzado. Así el posicionamiento de estos últimos en los cascos urbanos y la implementación de la política

¹⁰ “En Antioquia en 1994, se crearon las Convivir, grupos de autodefensa legalizados que se instalaron abiertamente en los municipios y, exhibiendo sus armas, dominaron a la población” (PNUD, 2006, p.14).

de Defensa y Seguridad Democrática durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, potencia la confrontación y sus efectos en la región (García y Aramburo, 2011, p.57).

Si bien las FF.MM. fueron un actor medianamente ausente antes del 2002, a partir de esta fecha cobraron protagonismo. Las operaciones militares no solo diezmaron a los grupos guerrilleros sino que le abrieron paso a toda la potencia de la guerra. Aquí, tres operaciones que es justo resaltar en el territorio durante esta etapa: Operación Meteoro (2002), 2.500 hombres custodiaron la autopista Medellín-Bogotá; Operación Marcial Norte (2003), dirigida contra los frentes 9 y 47 de las FARC-EP y el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN; Operación Espartaco (2004); los mismos frentes de la anterior operación fueron atacados en los municipios de San Carlos, San Luis y Sonsón (Corporación Jurídica Libertad, p.28).

Una última etapa que resaltan García y Aramburo (2011) en su estudio es el periodo a partir de 2005, caracterizado por la disminución de los eventos armados, con un bache en el 2007 que presenta un aumento en los índices de confrontación. Es importante para este lapso señalar dos fenómenos: el primero, la ausencia casi total del ELN y, el segundo, el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Con el proceso de negociación de los grupos paramilitares, el Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó de manera voluntaria. Sin embargo, muchos de sus combatientes engrosaron las filas del Bloque Héroes de Granada, que mantiene su presencia en el territorio del Oriente antioqueño durante el 2003 y el 2004. Posteriormente el Bloque Héroes de Granada se desmoviliza en la finca La Mariana, corregimiento de Cristales, del municipio de San Roque. Sin embargo, este proceso crece con grandes dosis de desconfianza pues, como lo señala el informe del IPC: “De los 2033 desmovilizados sólo 30 serán procesados por algún tipo de delito, lo que pone en evidencia, aún más, la ineficacia e impunidad que alimenta la ley de Justicia y Paz” (p. 61).

La deslegitimación de este proceso de desmovilización está atravesado por la identificación que hacen los pobladores de asuntos como el control de la siembra y el comercio de la coca¹¹, así como el control social por parte de desmovilizados organizados en otras formas de acción (p.80); de tal manera que la última gran expresión del conflicto es el registro de cultivos ilícitos:

La siembra de coca ha llevado a numerosos campesinos a vivir en la ilegalidad, lo que ha roto procesos de cohesión social y de gobernabilidad. En los últimos años se han encontrado algunos laboratorios de procesamiento de coca en municipios del Oriente Antioqueño, y se han identificado rutas para sacar la llamada "pasta de coca" hacia Medellín y el Magdalena Medio. En la región se asegura que estas rutas son manejadas por bandas criminales como Los Rastrojos y Los Paisas (PNUD, 2010, p.17)

¹¹ Los cultivos de coca y la relación de la subregión con el narcotráfico se dan en esta última etapa del conflicto, estos solo habían tenido presencia relevante en la frontera con el departamento de Caldas, para este momento logran expandirse por buena parte del territorio (García y Aramburo, 2011, p.103)

La reconfiguración del territorio tiene, ahora, en la subregión un fuerte enlace con el poder militar que tiene por objeto la erradicación de los cultivos ilícitos, el desminado humanitario¹² y el combate con la guerrilla presente en la zona. El PNUD (2010), destaca que otro asunto importante ha sido el retorno de la población desplazada, como el caso del regreso de más 500 habitantes, en el 2009, al corregimiento de Santa Ana en el municipio de Granada, que contó con la participación del entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva (p.26).

3.5 Situación de los medios de comunicación en la región

El diagnóstico de medios en Oriente conserva una situación similar a la presentada por la región de Urabá. La bibliografía al respecto es casi nula y convierte al proyecto Red Antioquia en el antecedente más próximo y confiable. De igual modo, la Deutsche Welle Akademie en asocio con la Universidad diagnostican los medios de comunicación en esta región del departamento, en el marco de todas aquellas particularidades de tipo económico, social y político, descritas anteriormente.

Así pues, en los 23 municipios del Oriente antioqueño, durante la etapa diagnóstica del proyecto “Hacemos Memoria, estrategia para la formación de periodistas en Memoria histórica”, fueron identificados ochenta medios de comunicación, de los cuales sesenta y seis pudieron ser contactados y encuestados. Según Red Antioquia, de las nueve regiones del departamento, el Oriente registra el mayor número de medios de comunicación, mientras que el Magdalena Medio ocupa el último lugar (Red Antioquia, 2014).

La mayoría de los medios contactados en el Oriente son radiales: se encontraron veintidós emisoras que representan el 33% de los medios encuestados. Los impresos ocupan el segundo lugar: veintiún periódicos y revistas fueron identificados en la región (32%). La televisión es el tercer medio con mayor presencia en la zona: se hallaron dieciocho canales (27%). Los medios digitales tienen la menor representación: solo se localizaron cinco páginas web (8%).

En la subregión del Altiplano, conformada por nueve municipios, están ubicados la mayoría de los medios de comunicación; esta zona cuenta con el 50% de las emisoras, canales de televisión, periódicos, revistas y medios digitales contactados en el Oriente. Esta cifra se puede interpretar bajo la lupa de las características del Altiplano, pues, como ya se explicó, en este sector se concentra buena parte de la actividad de la región.

El Oriente antioqueño tiene una tradición organizativa de la cual los medios de comunicación no se abstraen; allí, el 46% son comunitarios. Dentro de los 29 medios comunitarios encontrados por este diagnóstico del proyecto, ejecutado por la Deutsche Welle Akademie y la Universidad de Antioquia, se cuentan la mayoría de las emisoras y canales de televisión, los cuales pertenecen a asociaciones y Juntas de Acción Comunal. La

¹² Una de las estrategias por parte de los actores armados, para la protección de sus territorios, fue la instalación del minas; en la actualidad la Gobernación de Antioquia

ciudadanía tiene voz y voto en las decisiones que conciernen al funcionamiento de estos medios, lo que confirma la capacidad y las oportunidades de la región en razón a su vida asociativa y en comunidad.

En esta subregión del departamento las lógicas del conflicto armado marcaron también las cotidianidades, es por ello que las agendas de los medios de comunicación, en un buen porcentaje, aseguran que el tema hace parte de su cobertura informativa; esta situación para 44 de los 66 medios contactados—lo que equivale al 67%.

La mayoría de los medios de comunicación radiales, televisivos, impresos y digitales que abordan este tipo de contenidos no tienen una postura o línea editorial definida que los oriente a la hora de cubrir temas como el conflicto, el postconflicto, la memoria histórica, las víctimas o las iniciativas de paz que surgen en sus municipios.

Algunos medios se limitan a publicar información institucional sobre estas temáticas. La Personería, las asociaciones de víctimas, los comandantes de las estaciones de policía o los funcionarios de las administraciones municipales son los encargados de proporcionar los datos que replican los medios. Entonces, en los noticieros y magazines solo se habla sobre las actividades y procesos que se adelantan en favor de las víctimas o se emiten reportes oficiales sobre orden público.

También es importante resaltar que la cultura, la educación y el deporte son los temas que más se abordan en los medios de comunicación del Oriente. La información de actualidad está muy ligada a los reportes que emiten las instituciones públicas y privadas presentes en los municipios. En algunos casos, son los mismos funcionarios de las administraciones municipales los que se encargan de realizar los programas que se emiten en las emisoras y los canales de televisión.

En el Oriente, los medios de comunicación hacen parte de la identidad de la región. La mayoría de ellos tienen más de diez años de existencia. Esta amplia trayectoria convierte a emisoras, periódicos y canales de televisión en los medios más tradicionales y reconocidos de la región; además, la permanencia les ha permitido posicionarse en sus municipios.

En conclusión, a través de este diagnóstico puede estimarse que si bien hay dificultades económicas para el sostenimiento de los medios de comunicación, en el Oriente antioqueño la fuerza organizativa, evidenciada en otros asuntos como la resistencia al conflicto armado, ha permitido el desarrollo de estos proyectos muy en asocio con el crecimiento de la región.

3.6 Bibliografía

Corporación Jurídica Libertad (2015). El proyecto minero energético en la región del oriente antioqueño.

García de Botero, C. I. (1996). Urabá. Región actores y conflicto, 1960-1990. Bogotá, Cerec.

García de Botero, C. I. (2004). Resistencias. Análisis Comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y el Oriente antioqueño. Nómadas, Bogotá, n. 20, pp. 102-110).

García de la Torre, C. I.; Aramburo Siegert, C. I. (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008. Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.

Instituto Popular de Capacitación (2006). Píldoras para la memoria: violaciones de derechos humanos y crímenes de Lesa humanidad en el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño 2000-2004. Medellín, Instituto Popular de Capacitación.

Jaramillo, A. M. (2007). La experiencia del desplazamiento forzado en Urabá y el oriente antioqueño 1998-2006. Controversia, Bogotá, n. 189, pp.147-171.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Oriente Antioqueño: Análisis de la conflictividad.

Uribe de Hincapié, M. T. (2001). Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998.

CONTEXTO MEDELLÍN

4.1 Análisis sociopolítico y aspectos sociodemográficos

Medellín, la segunda ciudad más importante (económica y demográficamente) de Colombia, es la capital del departamento de Antioquia, al noroccidente del país. Para entender las condiciones que han propiciado su relevancia hace falta saber que la ciudad está enclavada en la cordillera central de los Andes, en medio del Valle de Aburrá, atravesada por el Río Medellín. Su ubicación geográfica y las condiciones climáticas derivadas de esta propiciaron, durante el Siglo XIX, que en la ciudad florecieran la producción industrial y el comercio, opacando así a otras villas como Santa Fe de Antioquia y Rionegro. Rápidamente se consolidaron numerosas rutas comerciales que conectaron la ciudad con el resto del país, propiciando una explosión demográfica no muy distinta de la experimentada por otras ciudades andinas de América Latina. Sin embargo, la guerra civil (comúnmente llamada La Violencia) que asoló el país a mediados del Siglo XX produjo (junto a las condiciones que en otros países produjeron emigración masiva del campo a la ciudad) el desplazamiento de muchos campesinos que llegaron a Medellín y acabaron por fundar nuevos barrios en sus periferias. Dicha emigración, además de convertirse en fuente de mano de obra para una industria en crecimiento (situación parecida a la de muchas ciudades en todo el mundo), produjo condiciones que reflejaron de alguna forma las dinámicas de la guerra que enfrentaba el país. Según Mary Roldán, los años en los que más campesinos llegaron para asentarse en Medellín coinciden con aquellos en los que, en gran parte del departamento antioqueño, las guerrillas liberales ganaron mayor terreno y cometieron el mayor número de masacres en pueblos y veredas conservadoras (2003). Como resultado, un gran porcentaje de aquellos que emigraron era afín a las ideas del Partido Conservador, y tal condición tendría después consecuencias notables para la ciudad.

Así pues, la consolidación de Medellín como ciudad industrial y comercial propició, hasta la década de los setenta del Siglo XX, un crecimiento económico considerable que acabó consolidando a la ciudad como la segunda más importante de Colombia. Sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurría, surgían pequeños grupos dedicados al hurto y el contrabando, y la ubicación geoestratégica de la ciudad acabó por adquirir todo su peso cuando los aún modestos grupos narcotraficantes comenzaron a surgir, ampliando sus plantaciones en todo el departamento (con un suelo propicio para el cultivo de hoja de coca y marihuana), momento en el que la ciudad se convierte en corredor estratégico para pasar mercancía rumbo al Bajo Cauca o la zona del Urabá antioqueño, desde donde podían exportarla. La rentabilidad de dicha actividad económica produjo, en poco tiempo, el surgimiento de grupos cada vez mejor organizados y con mayor capacidad de maniobra entre los que se contaba aquel que la DEA daría en llamar el Cartel de Medellín, integrado (entre otros), por el célebre Pablo Escobar Gaviria. El Cartel llegó a agrupar a varios grupos

de narcotraficantes, alcanzando un gran nivel de cohesión y jerarquización, y sentando las bases de las dinámicas sociales, económicas y políticas que alcanzaría la ciudad.

El gobierno estadounidense (a través de la DEA), no tardó en fijarse en los grupos narcotraficantes, puesto que la mayor parte de sus exportaciones iban a parar precisamente a ese país. El Gobierno Nacional, aliado estratégico del país norteamericano, comenzó a concentrar sus esfuerzos en combatir al Cartel de Medellín, sin sospechar que dicho grupo pondría en juego una serie de estrategias para las que no estaban preparados. La jerarquía empresarial y el recurso a modelos de subcontratación permitieron que el grupo forjara una serie de alianzas y pactos con grupos delincuenciales que habían logrado afianzarse en los barrios periféricos de Medellín, y a través de estos, fragmentar la soberanía del Estado sobre algunas zonas de la ciudad, donde este dejó de ser el principal agente del orden político y la principal autoridad para gestionar conflictos públicos y privados. De esta forma, los usuales procesos de fragmentación y escisión inherentes a la conformación de las ciudades latinoamericanas se acentuaron y materializaron “como una escisión en los espacios, en las gentes y en sus formas de relacionarse” (Vélez, 2001, p. 64). Los grupos delincuenciales, así pues, ganaban control sobre un territorio en el que fungían como autoridad de facto, gestionando las actividades económicas, la convivencia y los comportamientos de quienes habitaban sus espacios; se financiaban a través del cobro de impuestos (las famosas vacunas, que para el Estado son cobros extorsivos), la venta de drogas ilícitas, el sicariato y la subcontratación con grupos más grandes, como el Cartel de Medellín. La complejidad de dicho sistema propicia los enfrentamientos entre distintos grupos y la aparición de varios fenómenos: en primer lugar, el de las llamadas fronteras invisibles, cuyo trazo buscaba remarcar el dominio de un grupo sobre una zona, impidiendo la circulación de los habitantes de un territorio hacia otro dominado por un grupo rival; en segundo lugar, las milicias populares y grupos de autodefensa hacen aparición y comienzan a disputarle a los grupos pequeños su hegemonía. Este último fenómeno es particularmente interesante puesto que suele interpretárselo como extensión del conflicto armado nacional (mayoritariamente rural) a la ciudad (Blair et al. 2008). A finales de la década de los ochenta, integrantes de las guerrillas del ELN y EPL forman las milicias populares con la intención de enfrentarse a las bandas delincuenciales; las más fuertes de entre ellas fueron las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo (MPPP) y las Milicias Populares del Valle de Aburrá (MPVA) (Medina, 2006). Así, nuevos actores se sumaban a una ecuación compleja en la que ya figuraban los pequeños combos delincuenciales con fuerte arraigo territorial y las bandas con mayor capacidad militar y económica, además, claro, de grandes emporios como el Cartel de Medellín, todo ello sumado a las fuerzas estatales y a pequeños grupos de autodefensa. Esto produjo, allí donde los actores operaban, “fragmentación del espacio, dispersión social, redimensionamiento de la acción política, reconfiguración de los procesos de mediación y de institucionalización” (Vélez, 2001, p. 66), y en últimas, puso en vilo la soberanía estatal, no sólo contradiciéndola en ciertos casos, sino incluso recibiendo por parte de autoridades estatales la delegación voluntaria de dicha soberanía. La gran cantidad de grupos y actores armados y su arraigo social dieron lugar a diversas tesis sobre

la supuesta existencia de una cultura de la ilegalidad, mafiosa o violenta en la ciudad de Medellín, fundamentada sobre el ya ampliamente estudiado fenómeno del sicariato en las zonas más necesitadas de la ciudad, donde para comienzos del Siglo XXI al menos 8600 jóvenes menores de 25 años habían ingresado a estos grupos (Vélez, 2001, p. 65).

4.2 Conflicto armado, formas de participación y organización política

La presencia de los actores armados en la ciudad afectó de múltiples formas la participación y organización política de sus habitantes, en distintas etapas y de distintas formas, casi siempre de forma paralela a la del Gobierno central. Como ya se ha mencionado, la fragmentación de la soberanía impidió de facto al Estado ejercer su autoridad en varias zonas de la ciudad, por lo que la participación política entendida de forma ortodoxa (como ejercicio del voto), se vio notablemente afectada. La supuesta asociación entre juventud, espacios geográficos específicos y criminalidad dio lugar, a su vez, a una serie de políticas públicas enfocadas en la seguridad. El principal agente encargado de ejecutar dichas políticas era pues la Policía, que debía combatir por la vía militar a los grupos delincuenciales. Dicha política de securitización dio lugar, sin embargo, a diversos fenómenos: en primer lugar, la aparición de grupos de autodefensa para combatir a los grupos delincuenciales; en segundo lugar, la alianza de algunos sectores políticos con dichos grupos, o la complicidad de la Fuerza Pública en su accionar.

La incursión de las milicias populares, cuya bandera política no difería demasiado de la de las guerrillas de izquierda que actuaban en el sector rural (a las que estaban afiliadas), acabó derivando en una compleja relación donde distinguir entre el accionar político de las milicias y los actos asociados con delincuencia común se tornó sumamente difícil. Tal fue la deformación de dichos grupos, que algunos autores llegaron a entenderlos como una confederación “de emperadorcillos locales gobernando su condado” (Medina, 2006, p.46). Este fenómeno potenció a su vez el surgimiento de grupos de autodefensa apoyados por la Fuerza Pública y por diversas fuerzas políticas, de tal modo que Medellín llegó a convertirse en una aglomeración de pequeñas soberanías (Caraballo, 2013, p.250), todas ellas conviviendo “sobre un trasfondo histórico de exclusión e inequidad social, económica, política y cultural” (Gil, 2009, p.12). De esta forma, en Medellín convivían simultáneamente la participación política legal, ceñida a la autoridad de un Estado central, y las prácticas políticas violentas profundamente complejizadas por la gran cantidad de actores que hacían parte de ellas y por su extraña forma de relacionarse. Además, ambas formas solían imbricarse a través de pactos y complicidades de diversa índole.

En Medellín han emergido (en algún momento), muchas formas de violencia con motivos muy disímiles y formas de acción muy diversas. Además de la delincuencia común, presente en buena parte de Latinoamérica y usualmente relacionada con ciertas condiciones de exclusión o marginación, en la ciudad se ha trazado una intrincada serie de relaciones de poder que conviene abordar, en principio, desde cada uno de los actores armados que la conforman:

-Milicias populares: Llegan a Medellín en la década de los ochenta, y representan a su vez un movimiento de las coordinadoras guerrilleras nacionales para acercarse a las ciudades y una respuesta armada al ya para entonces fuerte dominio de grupos delincuenciales asociados con grupos de autodefensa y narcotraficantes. Las milicias apelaron simultáneamente a la formación política de los miembros que reclutaban y a la acción armada en contra de grupos rivales para disputarles territorio y/o debilitarlos. Funcionaban a la vez como proyectos políticos contra-estatales y proyectos armados de limpieza social o antidelinuencia. Llevaron a cabo procesos relativamente exitosos de consecución de bases sociales de las cuales llegó a emanar su legitimidad, y llegaron a asociarse con organizaciones sociales de carácter civil, impulsando también la participación política y la militancia en espacios de legalidad (como las Juntas de Acción Comunal, espacios sociales de gestión y discusión comunitaria de carácter barrial).

La mayor parte de las milicias estaban adscritas al ELN, EPL y FARC-EP, aunque también la guerrilla del M-19 alcanzó poder en la ciudad a través del establecimiento de campamentos urbanos. Sus bases sociales derivaban en parte de una adscripción ideológica, pero la mayor parte de sus apoyos provenían de sectores vulnerables que habían padecido el accionar de los grupos delincuenciales y veían en las milicias la posibilidad de enfrentarlos. Por eso triunfó la vía militar sobre la política, aunque en grados distintos según el grupo y condiciones tales como su adscripción nacional o su ubicación geográfica. Los grupos que alcanzaron mayor poder en la ciudad fueron las MPVA y las MPPP (ya antes mencionadas), que consiguieron no sólo un considerable control territorial al noroccidente de la ciudad, sino además una capacidad militar que les permitió pactar con los grupos delincuenciales en varias ocasiones, sentando así las bases de lo que serían, en adelante, las relaciones de poder en la ciudad.

Así, grupos como “Los Calvos”, “Los Nachos”, “La Gallada del Loco Uribe”, “La Caseta” o “Los Capuchos” fueron prácticamente exterminados por las milicias, que contaban con un alto grado de entrenamiento militar (incluso los miembros más urbanos) y con armas mucho más sofisticadas (Caraballo, 2013). El sometimiento militar de los grupos delincuenciales le permitió a las milicias pactar con ellos la distribución del territorio y, más tarde (lo que acabaría por debilitarlas), de las actividades ilegales. Entre estos pactos se cuenta, por ejemplo, el del barrio Villa del Socorro, en 1990, que acabaría llevando a las milicias hacia una “heterogénea mezcla de todo tipo de intereses, historias y técnicas que hacían imposible distinguir entre izquierda armada, delincuentes comunes o narcotraficantes” (Caraballo, 2013, p.249-250). Así, las banderas ideológicas de las milicias (que giraban en torno a elementos contrarios al capitalismo y la codicia que según sus miembros guiaba el accionar de bandas y narcotraficantes), debieron ser constantemente revaloradas al enfrentarse a un contexto político poco propicio para la difusión de tales ideas, difuminando a las milicias en conductas similares a las de los grupos que combatían, como la limpieza social, narcotráfico y extorsión.

Desde su irrupción en los barrios periféricos de Medellín, las milicias se enfrentaron a un conflicto discursivo similar al que libraban el Estado central y las guerrillas en todo el país, pues su carácter político y talante revolucionarios fueron subestimados, asociándoseles directamente con la delincuencia común ya presente en los barrios en que actuaron, o entendiéndoseles como simple extensión de los ya diezmados grupos armados de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Pronto las milicias y su desviación hacia prácticas delictivas similares a las de sus contrincantes, debilitaron su base social y provocaron rupturas internas particularmente graves. Para el caso de las MPPP, por ejemplo, su intransigencia política le costó el apoyo de organizaciones sociales que preferían actuar a través de los canales institucionales, y pronto su accionar comenzó a restarle credibilidad, condición que las obligó, para mantener el control previamente alcanzado sobre ciertas zonas, a practicar políticas de mano dura que afectaron definitivamente a la organización. Estas condiciones llevaron a ambos grupos (MPPP Y MPVA) a iniciar procesos de reinserción en 1994. Así, las milicias se desmovilizan a cambio de modestas exigencias (la mayoría incumplidas), como obras de infraestructura o garantías judiciales, y dan lugar a un nuevo y complejo fenómeno: sabiéndose impotente en las zonas que las milicias controlaban como actores armados, el Estado decide crear Coosercom, cooperativa de seguridad integrada por desmovilizados de las milicias a los que rearmaba y cuyo fin era prestar seguridad en las zonas que estas controlaban antes de la desmovilización. El proceso fue desastroso, la cooperativa fue declarada ilegal al cabo de poco tiempo, y la mayoría de sus miembros se dispersaron integrándose a grupos de autodefensa o delincuenciales.

-Grupos de autodefensa: Bajo este paraguas deben agruparse una serie de grupos bastante diversos, que van desde algunos pequeños conformados para defenderse de las prácticas de algunos grupos armados, hasta aquellos otros altamente organizados que representaban a organizaciones de carácter nacional como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) o las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), en complejas relaciones con sectores políticos, narcotraficantes, delincuentes comunes y empresarios.

Los primeros surgieron espontáneamente y actuaron de formas similares: para solucionar pequeñas rencillas, cobrar venganzas o eliminar individuos “indeseables”; los segundos, en cambio, llegaron a la ciudad en los años 90 desde las periferias, haciéndose llamar Bloque Metro (en clara alusión al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por Medellín y municipios aledaños). Dicho grupo llegó con la intención de disputarle territorio a las milicias guerrilleras, para lo cual recurrió a alianzas con grupos delincuenciales y pequeños combos, difuminando nuevamente la frontera entre grupos de autodefensa y delincuentes comunes, aplicando tácticas paramilitares.

El grupo comenzó a recurrir, además, a estrategias de subcontratación con bandas como La Terraza, que le ofrecía sus servicios de sicariato o secuestro. De nuevo, la hibridación entre grupos produjo tendencias ya usuales, como el pactismo (al que se acudía con muchísima frecuencia), y la simultaneidad de labores u objetivos. El Bloque Metro combatía a las

milicias populares y a su base social a la vez que pactaba con algunas de sus facciones corredores para el paso de drogas o treguas prolongadas; incentivaba la creación de grupos como Muerte A Sindicalistas o Majaca (Muerte a Jaladores de Carros) al tiempo que incursionaba en delitos comunes a medida que las fronteras entre autodefensa y delincuente se difuminaban; ejercía labores de limpieza social al tiempo que justificaba su lucha contra las milicias en la recurrencia de esos grupos a dicha práctica; prestaba servicios y pactaba con grupos de narcotraficantes y, a la par, asesinaba o desaparecía drogadictos y pequeños expendedores.

Luego, el renombrado Carlos Castaño reúne a los grupos de autodefensa nacionales en las llamadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), donde el Bloque Metro comienza a enfrentarse a otros bloques, como el Cacique Nutibara, liderado por alias Don Berna. Dicha rivalidad (que tuvo un carácter económico antes que ideológico), dio lugar a la formación del Bloque Héroes de Granada, que se encargó de exterminar al Bloque Metro con ayuda de los hombres del Cacique Nutibara.

Durante los años en que convivieron en la ciudad el Bloque Metro y el Cacique Nutibara (2001-2003), se enfrentaron constantemente por el control del territorio y del monopolio de la seguridad, que los grupos de autodefensa solían prestar para narcotraficantes o grandes combos. El Cacique Nutibara obtuvo en poco tiempo un mayor número de combatientes (reclutados o bien por subcontratación, o bien por medio de sus redes de apoyo al narcotráfico, que se tornaba negocio rentable para muchos jóvenes vulnerables), y estableció alianzas que sentarían las bases de su futura desmovilización. Bajo este contexto se produjo, en el año 2002, la Operación Orión, un operativo militar impulsado por el Estado central en varios barrios de la Comuna 13, al Centro Occidente de la ciudad, para combatir a las guerrillas y sus reductos. El operativo fue ejecutado por miembros de Ejército y Policía en connivencia con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, que realizaron detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y un gran número de desapariciones. Además, tuvieron lugar algunos enfrentamientos entre los miembros del operativo y los reductos guerrilleros, más de un centenar de capturas y un número indeterminado de ejecuciones extrajudiciales. Muchos de los desaparecidos fueron llevados por los paramilitares a sitios donde se tornara complicado encontrar sus cuerpos, como La Escombrera, en la misma Comuna 13, un viejo depósito de desechos de construcción donde a día de hoy (según la Fiscalía General) siguen reposando varias decenas de cuerpos.

La compleja relación del Bloque Cacique Nutibara con la Fuerza Pública y diversos grupos delincuenciales lo llevó, en noviembre de 2003, a unirse al proceso de desmovilización nacional que el presidente Álvaro Uribe comenzaba a llevar a cabo con las AUC. Ese proceso de desmovilización urbana puso de nuevo a la vista la ambigüedad de las pertenencias grupales y la recurrencia al transfuguismo en los grupos armados. El Bloque Metro, que no aceptó unirse al proceso de desmovilización, fue exterminado por los hombres del Cacique Nutibara y su líder, alias Doblecerro, fue perseguido y asesinado en el norte del país. La mayor parte de los que se desmovilizaron en 2003 acabó engrosando las

filas de pequeños y medianos grupos delincuenciales, y el líder del Cacique Nutibara, alias Don Berna, se convirtió en el líder de una organización narcotraficante conocida como la Oficina de Envigado.

Precisamente en torno a esta organización ha girado el conflicto en Medellín durante los últimos años. Desmovilizados los grupos de autodefensa y prácticamente erradicados los reductos de las milicias populares, la mayor parte de sus miembros pasó a engrosar las filas de estructuras que, aunque con nombres distintos, operan de formas muy similares a las que usaban los grupos paramilitares. Entre estas nuevas estructuras se cuentan, por ejemplo, Los Rastrojos, Los Urabeños (o Clan Úsuga), Los Paisas y la ya mencionada Oficina de Envigado. Dichos grupos han comenzado a funcionar como franquicias dedicadas al narcotráfico, la extorsión y delitos comunes que dependen, para su correcto funcionamiento, de alianzas y subcontrataciones con cientos de grupos pequeños. La disputa por el territorio y la apropiación de soberanía siguen estando intactos, igual que la tendencia al pactismo entre los grupos.

4.3 Situación de los medios de comunicación en la ciudad

En medio de estas dinámicas violentas, y en parte como respuesta a las conflictividades urbanas y a sus consecuencias más tangibles (exclusión de ciertas zonas de la ciudad, incertidumbre, precarias condiciones de vida, etc.), en Medellín han surgido múltiples medios comunitarios. De 64 medios analizados, el 55% eran comunitarios y de distribución gratuita, lo que dice mucho de su misión. Muchos de ellos, sin embargo, están sometidos a los recursos del Presupuesto Participativo (PP), que destina dineros públicos para muchos de estos proyectos. Sin embargo, estas mismas condiciones causan contratiempos a los medios que se benefician de ellos, creando no sólo dependencia (por la imposibilidad de acudir a otros medios de financiación), sino además inestabilidad laboral, auge y fortalecimiento de los grandes medios (con fuentes enormes de capital privado), y pocas posibilidades de innovación o de ampliación.

La gran mayoría de estos medios (obviando a los medios de alcance nacional o regional, que disponen de grandes recursos) tienen como público objetivo solamente a los habitantes de sus barrios o comunas, y el medio, en su producción de contenidos, termina por reflejar las condiciones, vivencias y reclamos de ese público objetivo. Muchos de ellos no recurren a tecnologías digitales o hacen un mal uso de ellas, lo que también dice bastante sobre las condiciones bajo las que se desenvuelven (no sólo precariedades económicas, sino, en algunos de ellos, con el trabajo de personajes autodidactas).

Muchos de estos medios comunitarios se ocupan de temas relacionados, precisamente, con la violencia que padecen o han padecido sus barrios y comunas. Programas de promoción de la Noviolencia o de la paz, iniciativas comunitarias o de recuperación de la Memoria Histórica, son usuales en sus contenidos. Dichos medios suelen convertirse en espacios a través de los cuales se expresan los problemas propios de su público objetivo. El 64% de los medios aquí analizados ha abordado y suele abordar los temas de conflicto armado,

siempre enfocados, como se ha insistido, en los problemas de sus respectivas comunas. En general, el de los medios en Medellín es un panorama diverso con propuestas limitadas (casi siempre por el bajo presupuesto), sensiblemente atravesado por las conflictividades urbanas que aún hoy padece la ciudad.

4.4 Bibliografía

Blair, E.; Grisales, M.; Muñoz, A. M. (2009). Conflictividades urbanas vs. guerra urbana: otra clave para leer el conflicto en Medellín. *Universitas Humanística*, No. 67, p. 29-54.

Caraballo Acuña, V. (2013). Órdenes locales, acuerdos de paz y presencia diferenciada del Estado. *Negociación con las Milicias Populares de Medellín*. Colombia Internacional, No.77, p.241-270.

Castaño Zapata, D. (2015). Entre armas y razones: excombatientes y dominación en el postconflicto urbano en Moravia-Medellín/Colombia. *Analecta Política*, Vol. 5, n.8, p. 73-96.

Vargas Velásquez, A.; García Pinzón, V. (2008). Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas públicas: la reducción de la violencia en Bogotá y Medellín. *Pensamiento Iberoamericano*, n.2, p.249-270.